

RE: Contestación demanda, escrito excepciones, poder. noticia criminal, documentos, anexos, Sentencia Acción de Grupo

Juzgado 04 Administrativo - Cauca - Popayán <j04admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 11/10/2023 4:44 PM

Para:Elier Erney Castillo Cardenas <elier.castillo@fiscalia.gov.co>

Buena tarde, acuso recibido

De: Elier Erney Castillo Cardenas <elier.castillo@fiscalia.gov.co>

Enviado: miércoles, 11 de octubre de 2023 3:20 p. m.

Para: Juzgado 04 Administrativo - Cauca - Popayán <j04admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Contestación demanda, escrito excepciones, poder. noticia criminal, documentos, anexos, Sentencia Acción de Grupo

Buenas tardes Servidores Judiciales,
Atentamente Juzgado 4o Contencioso Administrativo Circuito Popayán.

Me permito formalmente remitir lo aludido en el asunto de acuerdo a la siguiente información:

Ref.:	CONTESTACIÓN DEMANDA
Medio de Control:	REPARACIÓN DIRECTA
Proceso No.:	190013333004 2023 00058 00
Actor:	GENTIL SANCHEZ OLIVEROS – OTROS
Demandado:	<u>NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y OTRO</u>

Cordialmente,

Elier Erney Castillo Cárdenas

Profesional de Gestión II

Dirección Asuntos Jurídicos

Fiscalía General de la Nación

Calle 3 No. 2 - 76 Oficina 209

Celular 3137910167

Popayán Cauca

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Honorable Juez
Doctora CARMEN YANETH ZAMBRANO HINEZTROZA.
JUZGADO CUARTOTO (4º) ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
E. S. D.
Popayán Cauca

Ref.: CONTESTACIÓN DEMANDA
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Proceso No.: 190013333004 2023 00058 00
Actor: GENTIL SANCHEZ OLIVEROS – OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y OTRO

ELIER ERNEY CASTILLO CARDENAS, mayor, domiciliado en la ciudad de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao, Cauca, con Tarjeta Profesional número 140.187 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Nit. 800.152.783-2**, en adelante FGN, de conformidad con el poder que adjunto con sus respectivos anexos, con todo respeto y oportunamente, procedo a CONTESTAR LA DEMANDA que concita el asunto sub examine, así:

A. OPORTUNIDAD

Presento al honorable *ad quo* dentro del término establecido en los Artículos 161, numeral 1º, 172, 175, 199 y 200 del C.P.A.C.A., Ley 1437 de 2011, estos últimos modificados por la Ley 2080 de 2021, Ley 2220 de 2022 Artículos 92, 94 y 105, lo anterior conforme a la Ley 2213 de 2022, presento CONTESTACIÓN DE DEMANDA,

A.I. A LOS INTERESADOS

Frente a los demandantes la Fiscalía General de la Nación se atiene a lo que resulte probado en el proceso dentro de la etapa procesal pertinente.

Frente a los demandados, respetuosamente se solicita desvincular a la Fiscalía General de la Nación, si bien, esta entidad adelantó la investigación, el Fiscal del caso dentro de las facultades constitucionales y legales dadas por el **artículo 114¹ de la Ley 906 de 2004** no tiene la función de dictar o proferir condenas, función misional que se predica del Juez de Conocimiento.

¹ **Artículo 114. Atribuciones.** La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones:

1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito.
 2. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por este código.
 3. Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
 4. Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.
 5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo técnico de investigación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar.
- La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo, la de jurados y jueces, del Consejo Superior de la Judicatura.
7. Ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
 8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
 9. Presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral.
 10. Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando no hubiere mérito para acusar.

Se observa que la demanda también está dirigida contra la Rama Judicial, Administración de Justicia y su Representante Legal Director Ejecutivo, respectivamente.

Se evidencia además, que en el actuar de la Fiscalía General de la Nación se dio cumplimiento al artículo 115 de la Ley 906 de 2004, aplicando el Principio de objetividad.

A.II. AL INTERVINIENTE

Tiene competencia legal para hacer la Defensa Jurídica del Estado cuando se trata de situaciones que adviertan futuras condenas en contra de la Nación o de sus entidades adscritas, no se tiene objeción alguna pues es un imperativo legal de obligatorio cumplimiento establecido en el CPACA.

No obstante ante la solicitud de entrega Provisional ante el Juez 2º PENAL MUNICIPAL AMBULANTE, Constitucional con Funciones de Control de Garantías, siendo el vehículo incinerado, el cual se identifica de acuerdo a las siguientes características:

TIPO:	AUTOMOVIL,
MARCA	KIA,
LÍNEA	PICANTO EKO TAXI LX,
MODELO	2019,
COLOR	AMARILLO,
MOTOR NO.	G4LAJP085992,
CHASIS	KNAB2512AKT374866,
DE PLACAS	SHT 955,
DE SERVICIO	PÚBLICO Y AFILIADO A LA TRANSPORTADORA TAXIS POPAYAN

Aunado a lo anterior la investigación penal fue signada con el número SPOA, 19001600060120215419700, Carpeta a cargo de la Fiscalía Local 13 precedida por Fiscal: Dra. TERESA DE JESUS ACOSTA DE ACOSTA, correo electrónico institucional teresita.acosta@fiscalia.gov.co

Fecha de audiencia y lugar: Popayán, diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Apoderado del Indiciado CARLOS GUSTAVO VALENCIA ASTUDILLO.

Víctima: WILSON DAVID POTOSÍ NARVAEZ, apoderado Doctor. ALEXANDER PENAGOS PERDOMO
C. C.: 1061814743 - Contacto: Calle 3 A nro. 54-40 Popayán Correo: wilsongp24@gmail.com

En cuanto a la actuación del doctor CARLOS GUSTAVO VALENCIA ASTUDILLO, se resalta:

Exalta el togado que el automotor se encuentra catalogado como pérdida total dado que se encontraba en las instalaciones del parqueadero del barrio Bolívar que fue objeto de actos vandálicos el 28 de mayo de 2021 (el vehículo fue incinerado) y que, en vista de ello, ofrece como garantía para responder por posibles perjuicios la Póliza de Seguro Extracontractual nro. AA005207 que tiene fecha de vencimiento el 23 de septiembre de 2021. Dicha póliza ha sido expedida por la empresa Equidad Seguros.

11. Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este código.

12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto.

13. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión en los eventos establecidos por este código.

14. Solicitar nulidades cuando a ello hubiere lugar.

15. Las demás que le asigne la ley.

Parágrafo. Adicionado por el art. 10, Ley 1142 de 2007, así: El Fiscal General de la Nación o el Fiscal Delegado, según el caso, podrá actuar con el apoyo de otro Fiscal Delegado de cualquier categoría, tanto para la investigación como para la intervención en las audiencias preliminares o de juicio. Esta misma facultad podrá aplicarse en el ejercicio de la defensa

Por lo cual se arguye Su Señoría que ante una fuerza mayor, caso fortuito establecido en la Ley 95 de 1890, artículo 1² corresponde al aquí demandante reclamar ante la **Aseguradora Equidad Seguros**, por lo cual no puede pretender dos (2) reparaciones por **hechos constitutivos de terceros** y ajenos a la Nación -Fiscalía General de la Nación- a quien en esta oportunidad represento.

Ahora en cuanto a los hechos ocurridos en la fecha mayo 28 de 2021, se presentó un “**imprevisto que no es posible resistir**”, acontecimiento que ha sido caracterizado en los siguientes términos por la Corte Suprema de Justicia³:

“Sobre este último aspecto, conviene acotar -y de paso reiterar- que un hecho sólo puede ser calificado como fuerza mayor o caso fortuito, es lo ordinario, si tiene su origen en una actividad exógena a la que despliega el agente a quien se imputa un daño, por lo que no puede considerarse como tal, en forma apodíctica, el acontecimiento que tiene su manantial en la conducta que aquel ejecuta o de la que es responsable. Por eso, entonces, si una persona desarrolla en forma empresarial y profesional una actividad calificable como “peligrosa”, de la cual, además, deriva provecho económico, por ejemplo, la sistemática conducción de automotores de servicio público no puede, por regla general y salvo casos muy particulares, invocar las fallas mecánicas, por súbitas que en efecto sean, como constitutivas de fuerza mayor, en orden a edificar una causa extraña y, por esa vía, excusar su responsabilidad”.

Igualmente se tiene que el Órgano de Cierre Contencioso Administrativo⁴, Ha señalado:

“24. El deudor tiene la obligación de prever “lo que es suficientemente probable, no simplemente posible”, por lo que un hecho se considera imprevisible si no existe manera de contemplar o anticipar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de súbito o en forma intempestiva. La calificación de un hecho como fuerza mayor debe efectuarse de cara a cada caso concreto, esto es, ponderando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el suceso. Según la jurisprudencia, para tal efecto deben considerarse los siguientes criterios: (i) el referente a su normalidad y frecuencia, (ii) el atinente a la probabilidad de su realización y (iii) el concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo”.

Con base a lo anterior se sugiere proferir Sentencia anticipada, en atención y aplicabilidad de la Ley 2080 de 2021, como lo instruye el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, la cual adicionó el artículo 182A a la Ley 1437 de 2011, y se introdujo la posibilidad de poder dictar sentencia anticipada en el proceso contencioso administrativo.

B. INDIVIDUALIZACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

B.1 FRENTE A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE PARTES:

De la persona que presenta reclamación como presunta víctima se determinará con base en lo que resulte probado en el trámite de la demanda de reparación directa, en el entendido que no basta afirmar la condición de propietario sino la real afectación para demandar. Ello frente al uso debido y en lo concerniente a la custodia, tenencia, disposición de la cosa reclamada empero, ante su debida diligencia.

B.2 FRENTE A LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA.

NO se tiene objeción alguna.

B.3 FRENTE A LOS DEMANDADOS, En la demanda se vincula a la **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, quien, por intermedio de su apoderado, propone la excepción de falta de legitimación en la causa por

² Artículo 1. Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el presamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Etc. **Ver artículo. 64 Código Civil.**

³ Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 7 de diciembre de 2016, SC17723-2016, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de septiembre de 2003, Exp. 14.781, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

PASIVA, toda vez, que dentro de las funciones de la entidad fiscalía y que están dadas por el artículo 250 Superior, desarrollado en la Ley 906 de 2004, no se encuentran las de **carácter de protección de bienes**, cuando **ellos no han ingresado legalmente y bajo el procedimiento reglado a los parqueaderos dispuestos por la entidad**, como sería la guarda y custodia para los vehículos incautados. Al respecto en el desarrollo de la contestación se presentaran los argumentos de hecho, de derecho y los lineamientos jurisprudenciales del **Tribunal de Cierre** en lo *Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional* que ratifican lo antes señalado.

C. AGOTAMIENTO DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

Obra en la contestación de la demanda la Constancia No. 017 de no conciliación y acta de audiencia celebrada el día 23 de marzo de 2023, emitida por la Procuraduría 188 Judicial I para Asuntos Administrativos de Popayán, Doctor DIEGO FELIPE VIVAS TOVAR, en virtud del numeral 1 del artículo 161 del CPACA, lo anterior en armonía con los artículos 92, 94, y 105 de la ley 2022 de 2022.

D. A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

D.1. COMPETENCIA FUNCIONAL, TERRITORIAL Y ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.

Está determinada en la normatividad vigente.

Sobre el fundamento de la falla en el servicio en que finca la demanda como medio de control reparación directa, la entidad FGN., informa que no están probados los supuestos de hecho y de derecho que *conforman las pretensiones y demás acciones que integran la demanda*, por tanto, desde este momento procesal se solicita la desvinculación del proceso, o su en defecto **negar las pretensiones**, toda vez, que de los *medios de prueba que se allegaron con la demanda* y de las objeciones y las aportadas en la contestación está desvirtuada la responsabilidad de mi representada, pues se tiene prueba fehaciente y certificada que el vehículo de Placas SHT-955 no ingresó a los parqueaderos que la FGN dispuestos para tal fin.

Sobre el cuántum de la demanda estimado por el demandante con pretensiones indemnizatorias, es bastante oneroso y no obedece a la realidad, *añado a la característica que el daño antijurídico sea cierto*, toda vez, que *no se pueden indemnizar daños supuestos*, pues de ser así se generaría un enriquecimiento sin causa para el demandante y un detrimento patrimonial para el Estado - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, máxime cuando se predica que se está en época de austeridad en el gasto público y los hechos vandálicos donde hurtaron e incendiaron los vehículos fueron ocasionados por terceros ajenos a la entidad fiscal.

Por la cuantía se tiene competencia funcional y territorial por parte del Juzgado Contencioso Administrativo Circuito de Popayán que admitió la demanda toda vez que el proceso *no supera los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes*.

D.2 TERMINO DE CADUCIDAD.

Los hechos donde se ejecutaron los daños materiales por incineración de los vehículos del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Limitada datan del 28 de mayo de 2021.

Se agotó el requisito de procedibilidad según Radicación No. E – 2023-005722 de enero 10 de 2023 ante la Procuraduría 188 Judicial I en Asuntos Administrativos. Esta la demanda dentro del término perentorio establecido en el CPACA. No se tiene objeción, en atención al Auto Admisorio No. 1189.

La Acción de reparación directa fue estudiada por el Juzgado 4º Administrativo de Popayán, Despacho que emitió Auto Interlocutorio, por medio del cual procedió a admitir la demanda y fue notificada a la FGN el día 5 de septiembre de 2023.

D.3. FRENTE A LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD - FALLA EN EL SERVICIO POR PÉRDIDA POSESIÓN O TENENCIA DEL BIEN.

No es cierto, toda vez, que la medida de inmovilización del vehículo automotor de Placas SHT-955 fue ejecutada por personal adscrito a la Policía Nacional de Colombia, Comando Cauca.

Al respecto se informa que, las autoridades de tránsito que en *el ejercicio de la función de policía judicial* acuden al lugar del accidente e inmovilizan el vehículo, deben contar con un sitio o lugar en el cual ubiquen transitoriamente los rodantes para desarrollar los actos urgentes que la normatividad procesal penal ordena.

Este lugar o sitio de parqueo provisional debe ser provisto por el organismo de tránsito correspondiente, pues es éste el que cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de tal labor (grúas y patios) y **a quien la ley le asignó la función de realizar los actos urgentes en cumplimiento de sus actividades de policía judicial.**

Se tiene en la Noticia Criminal según SPOA, 190016000601202154197, DENUNCIA PENAL que se adjunta y con ocasión de los hechos se tiene:

Relato de los hechos: ¿Qué viene a denunciar⁵? LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO.

¿Cómo le pasó? SE RECIBE EL DÍA DE HOY **LUNES 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO** MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ATENCION AL USUARIO OFICIO SIN NUMERO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD MEDIANTE EL CUAL EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO HOYOS GIL, QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO DE LA FGN UN ACCIDENTE DE TRANSITO SUCEDIDO EL PASADO 25 DE MAYO A LAS NUEVE DE LA MAÑANA EN LA CALLE 5 CON CARRERA 27 BARRIO SANTA ELENA, DONDE RESULTA UNA PERSONA LESIONADA, AL EXPEDIENTE DIGITAL SE AGREGA DCOUMENTO.-

Nótese Su Señoría ad quo, que la denuncia se presenta en la fecha mayo 31 de 2021 y los hechos ocurren tres (3) días antes, es decir, en fecha mayo 28 de 2021, con lo cual se ratifica la falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con un patio de incautados que para la ciudad de Popayán, se encuentra ubicado en la Vereda San Bernardino en la Carrera 9N, de conocimiento de los señores Fiscales y Funcionarios Judiciales, donde se reciben los rodantes que hayan sido incautados como consecuencia de accidente de tránsito con lesionados y/o fallecidos, una vez se les haya realizado los actos urgentes y se cuente con todos los requisitos a saber:

Oficio firmado por el Fiscal en físico o enviado mediante correo electrónico institucional del Fiscal o del Asistente del Fiscal, en el cual autoriza el ingreso del vehículo al Patio Único en el que se especifique el delito en el que está inmerso el bien.

Estudio Técnico de Identificación Vehicular.

⁵ Ley 906 de 2004. **Artículo 67. Deber de Denunciar.** Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente.

Inventario físico del Bien.

Pantallazo Consulta en SPOA. Módulo Policía Judicial Gestión del Caso, en el cual se exprese la vinculación del vehículo a la noticia y que esta se encuentre activa.

E. MARCO JURÍDICO.

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado será patrimonialmente responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de sus agentes, dentro de los cuales se incluyen los funcionarios judiciales.

Entonces son dos los elementos que estructuran la responsabilidad; el primero, el daño antijurídico, entendido jurisprudencialmente como el menoscabo material o inmaterial que sufre la persona con motivo de la acción u omisión del agente estatal, la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento; el segundo, la imputación, entendida como la atribución fáctica y jurídica que del daño se hace al Estado, amén de la conducta activa u omisiva de sus agentes, pero sin que sea determinante, en principio, la evaluación personal de la responsabilidad de éstos, a menos que se juzgue su responsabilidad patrimonial vía repetición.

Ahora bien, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia – Ley 270 de 1996 –, dispone en su artículo 65 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos cometidos por la acción u omisión de sus agentes judiciales en tres eventos: **a) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia**; b) error jurisdiccional; y c) sic...

En cuanto al “error jurisdiccional”, el artículo 66 de la ley 270 de 1996 lo define como “aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”, los presupuestos para su configuración, conforme el artículo 67, ibídem, son:

(i) que se hayan interpuesto los recursos de ley y;

(ii) que la providencia se encuentre en firme.

F. FRENTE AL ACCIDENTE DE TRANSITO.

Se tiene información que el accidente de tránsito ocurrió en la fecha mayo 27 de 2021: a las 9:00 horas situación que fue atendido por Servidores Judiciales con atención de GUSTAVO ADOLFO HOYOS GIL, en calidad de agente de tránsito adscrito a la alcaldía de Popayán, ajenos a la Fiscalía General de la Nación como obra en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA No. 190016000601202154197, se observa que el accidente ocurrió en la fecha antes indicada, con lo cual se predica la **culpa exclusiva de la víctima** dada la conducción de vehículos siendo un trabajador del aquí demandante, y en atención a la actividad peligrosa⁶ aunado a ello se gesta el **hecho de tercero** en cuanto a la colisión accidente de tránsito que llevo el vehículo a los **patios o parqueadero donde fue incinerado.**

DELITO REFERENTE. LESIONES PERSONALES CULPOSAS - MEDIOS MOTORIZADOS.

LEY 599 DE 2000-CAPÍTULO TERCERO - DE LAS LESIONES PERSONALES

⁶ “La actividad peligrosa es pues, aquella que, va en su estructura ora en su comportamiento, con cosas inertes o en movimiento o raramente sin el uso de ellas, genera más probabilidades de daño de las que usualmente puede un ser humano promedio soportar y repeler, es aquella cuyos efectos se vuelven incontrolables, imprevisibles, devastadores por la multiplicación de energía y movimiento que supone o le es inherente, efectos además inciertos por su capacidad de destrozo mayor. En esta tarea, que el legislador ha delegado tácitamente al juez, pues no existe definición de lo que ha de entenderse por actividad peligrosa ni menos un catálogo de las que se tengan por tales, debe echar mano aquel de todos estos tópicos, de modo que no sea el capricho o el mero subjetivismo el criterio que predomine a la hora de encasillar una en particular dentro de esta categoría.” Corte Suprema de Justicia.

CONDUCTA ARTÍCULO. Tipos Penales	DEFINICIÓN
111	Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los Artículos siguientes.
112	Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de sic... Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena será de sic... Si pasare de noventa (90) días, la pena será de sic... (Penas aumentadas por el Art 14 de la ley 890 de 2004.)
113	Deformidad. Modificado por el art. 2, Ley 1639 de 2013. Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena será de sic... Si fuere permanente, la pena será de sic... Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará desde sic...
114	Perturbación funcional. Si el daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de sic... Si fuere permanente, la pena será sic...
115	Perturbación psíquica. Si el daño consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de Si fuere permanente, la pena será sic...
116	Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Si el daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de sic... La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. (Penas aumentadas por el Art 14 de la ley 890 de 2004.)
116A	Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. El que sic...
117	Unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los Artículos anteriores, sólo se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad.
118	Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes
119	Circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores, concorra alguna de las circunstancias señaladas en el Artículo 104 las respectivas penas se aumentaran de una tercera parte a la mitad.
120 PRESCRIPCIÓN PENA Disminuida de ¾ a la ½ Precaria	Lesiones culposas. El que <u>por culpa</u> cause <u>a otro alguna de las lesiones</u> a que se <u>refieren</u> los <u>artículos anteriores</u> , incurrirá en la respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes. Cuando la conducta culposa sea cometida <u>utilizando medios motorizados</u> o arma de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de
121	Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Las circunstancias de agravación previstas en el ARTÍCULO 110 , lo serán también de las lesiones culposas y las penas previstas para este delito se aumentaran en la proporción indicada en ese ARTÍCULO.

Con base y en atención a lo anterior la Fiscalía le corresponde y le asiste legalmente es la **investigación** y establecer con grado de certeza en que conducta punible se encuadra la **lesión personal** acaecida y puesta para su conocimiento, e investigación, igualmente realizar su **programa metodológico** en aras de impartir **órdenes a policía judicial** para el esclarecimiento de los hechos denunciados y que se predica del aquí INDICIADO, en calidad de demandante (*extremo de la Litis*)

Empero, la entidad que represento sería responsable de la incineración provocada del vehículo, por terceros ajenos a la Entidad, si hubiere estado (la Cosa) o el mismo rodante incautado en las instalaciones internas o en el **Parqueadero de la Fiscalía**.

Ahora el procedimiento reglado para la Autorización de vehículos siniestrados, es ante su juez natural competente, claro está ello, una vez se tengan las experticias (*Para caso que ocupa fueron realizadas por particulares*); y la **Plena Identificación** del vehículo automotor conforme a las previsiones establecidas en el Código de Procedimiento Penal – Actos Urgentes – Policía Judicial, que deben ser materializadas en el formato (FPJ-13) BIT- PROCEDIMIENTOS FISCALÍA – POLICÍA NACIONAL, ante y el vehículo que está involucrado en el *siniestro ocurrido por el accidente de tránsito enmarcado como de LESIONES CULPOSAS*.

Lo anterior cuando está probado con los anexos de la demanda que el EXPERTICIO TÉCNICO MECANICO, se practicó en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotor CDA, en virtud del convenio suscrito con el municipio de Popayán.

Lo anterior conforme a sus procedimientos internos REGLADOS de *Altas y de Bajas* cuando se requieren entregas de los velocípedos, *empero*, se aclara que a quien le asiste competencial jurisdiccional y funcional para que la fiscalía realice la Baja del vehículo y se le entregue a su propietario o abogado o dependiente judicial y en cuanto a las actuaciones y verificaciones si cumple o no con los requisitos de la entrega le corresponde y es ante el **Juez Constitucional de Garantías** se itera para las [E]ntregas.

Lo anterior su Señoría denota que la Fiscalía en cumplimiento de las normas que regulan funciones de policía judicial y frente a la incautación de vehículos en sus parqueaderos le asiste tomar Póliza de Seguros a efecto de pagar su siniestralidad cuando ocurren dentro de sus instalaciones, con razón o con ocasión de la *Tenencia y Custodia* de bienes donde se tiene la responsabilidad y manejo, además y en atención a la **Teoría de la Previsión**, y ante situaciones que se gestan intempestivamente y parten de la **Teoría del Riesgo**, que para el caso que ocupa el vehículo debía haber estado amparado con Seguro contra Riesgo, dada la actividad peligrosa que denota la conducencia de vehículos rodantes.

En ese orden de ideas y frente a la investigación penal no le asiste legitimación en la causa por pasiva.

G. FRENTE AL INCENDIO

El siniestro ocurrió en la fecha mayo 28 de 2021, en el parqueadero Centro Diagnóstico Automotor CDA en la ciudad de Popayán ubicado en la carrera 6ª No. 9 - 55. Donde funciona el parqueadero oficial del municipio de Popayán, Cauca.

Se establece que entre la CDA LTDA, y la Fiscalía **no tienen o no se cuenta con ninguna clase de contrato o convenio con esa Entidad**, es decir, el propietario es un tercero ajeno a la Fiscalía, como obra en el contrato suscrito entre la Alcaldía Municipal de Popayán y el representante legal del parqueadero, para probanza de esta situación particular y concreta se tiene prueba (contrato) que arrojó la parte Actora.

Dentro del plenario no se probó que el PARQUEADERO, sea de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, o que se tenga un contrato de depósito con el Parqueadero aludido.

Revisado el expediente contenido con la demanda se tiene contrato entre el Municipio de Popayán y El Centro de Diagnóstico Automotor Ltda., con cláusulas **expresas de tener garantías para responsabilidad civil contractual y extracontractual, en atención a las cláusulas 23 y 26 del contrato** por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación *Coadyuva el llamamiento en garantía en la cual se vincula a la compañía de seguros que ampara los siniestros y en amparo de la entidad tomadora del*

seguro. Yendo más allá en el evento que se Superen los topes, en caso de condena, se tenga en cuenta el Contrato de Seguro con la Póliza Previ-alcaldía – Ente Territorial Popayán.

G.1.- JURISPRUDENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CASACIÓN CIVIL.

G.1.1.- RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Presunción de guardián de quien figura como propietario del vehículo, desvirtuada mediante la prueba de la transferencia de su poder de dirección y control, por haber celebrado contrato de compraventa con entrega material al comprador, **sin registro del traspaso en la oficina competente.** (SC4750-2018; 31/10/2018)

G.1.2.- RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS-Diferencia entre el sistema de responsabilidad del Código Civil Colombiano y el modelo francés. Eventos en que se ha aplicado en el derecho de propiedad y en los casos de responsabilidad extracontractual establecidos en los artículos 2353, 2354, 2355 y 2356 del Código Civil. (SC4750-2018; 31/10/2018)

G.1.3.- GUARDIÁN DE LA COSA- Concepto. Comprende la obligación de guardia, custodia y control que sobre las cosas animadas o inanimadas ha de ejercer su dueño, tenedor efectivo o poseedor natural. Noción tomada de la jurisprudencia francesa. Eventos en que se ha previsto su aplicación en el derecho colombiano. Presunción de culpa y exoneración mediante prueba de elemento extraño. Figura de la guardia compartida. Reiteración de la sentencia de 22 de abril de 1997. (SC4750-2018; 31/10/2018)

"Es destacable entonces que en este tipo de responsabilidad civil extracontractual, que el sistema colombiano ha denominado por actividades peligrosas, el débito pueda generarse a partir del uso de cosas no obstante que el énfasis recaiga en la actividad y su connotación riesgosa. Y de allí que desde bien temprano la Corte haya tomado de la jurisprudencia francesa la noción del guardián de la cosa (peligrosa), luego extendida a la actividad. Por supuesto que esa cosa o actividad deben tener parte activa en la causación del perjuicio, presupuesto que, por otra parte, no es una noción moderna pues desde el derecho romano ya se contemplaba."

G.1.1.4.- RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN-Elementos estructurales para su prosperidad. El guardián de la cosa puede desvirtuar que transfirió su poder de dirección y control o que éste le fue arrebatado. Aplicación del artículo 2356 del Código Civil a las actividades que con cosas o sin ellas son riesgosas. Reiteración de las sentencias de 4 de junio de 1992, 17 de mayo de 2011, 4 de abril de 2013 y 8 abril de 2014. (SC4750-2018; 31/10/2018)

"De modo que a más de acreditar en el proceso el daño cierto, el factor de imputación (culpa, riesgo, etc. salvo que la ley lo presuma) y el nexo causal entre el daño y la conducta del agente, en esta responsabilidad por el hecho de las cosas deben estar también corroborados otros elementos: la relación del sujeto pretensamente responsable con la cosa de forma que se le pueda endilgar la calidad de guardián, y la actividad misma de esa cosa como causante directa o indirecta del perjuicio, actividad que si es peligrosa allana el camino para la aplicación del artículo 2356 de acuerdo con su decantada interpretación."

"(...) En el fondo, al que tiene el poder de control se le carga y exige el cumplimiento de la obligación de custodia y guarda de la cosa con la cual se causa el perjuicio. Esa guardianía en principio recae en el propietario pero puede desvirtuarse ésta si demuestra que transfirió ese poder sobre la cosa a otra persona o si esta le fue arrebatada, porque lo que en últimas está en juego es, más que la guarda jurídica, una especie de obligación de quien material o intelectualmente manipula y se vale de una cosa, que ella no cause perjuicios a terceros. Más, preciso es establecer que todo cuanto viene dicho, referido a las cosas peligrosas, la Corte lo ha venido aplicando con propiedad y a tono con el artículo 2356, a la actividad que con cosas o sin ellas son riesgosas; y así, el guardián de esta se hace responsable de los daños en los términos de tal precepto."

H. SOBRE EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se tiene que este opera en forma residual para aquellos eventos distintos a los expuestos en los artículos 66 y 68 de la citada ley, en que el daño antijurídico se sufre por actuaciones que no están consignadas en una providencia judicial, sino en la actuación de los funcionarios de la justicia.

Al respecto el Consejo de Estado sostuvo:

"En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales –distintas a la expedición de providencias– necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de estas últimas.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales; en efecto, en relación con las acciones u omisiones de estos últimos particulares, colaboradores de la justicia, el Consejo de Estado ha señalado que, cuando con unas u otras se causen daños antijurídicos, se deriva la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios⁷"

I. ANÁLISIS FÁCTICA FRENTE A LAS PRETENSIONES.

El demandante por medio del abogado solicita se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los supuestos daños y perjuicios causados a las víctimas con ocasión de la inmovilización e incautación del rodante Vehículo Automóvil, MARCA KIA, LÍNEA PICANTO EKO TAXI LX, MODELO 2019, COLOR AMARILLO, MOTOR NO. G4LAJP085992, CHASIS KNAB2512AKT374866, DE PLACAS SHT 955, DE SERVICIO PÚBLICO Y AFILIADO A LA TRANSPORTADORA TAXIS. Como se sustentó anteriormente, toda vez que la medida preventiva frente al automotor era proporcional, necesaria y razonable dada la connotación del tipo penal (LESIONES PERSONALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO.) al cual se vio vinculado el rodante y conforme al tema del bien con ocasión de lo establecido en el artículo 92 y siguientes del C.P.P.

Ahora bien frente al informe del primer Respondiente Policía de Tránsito, se tiene siniestro por accidente de tránsito de fecha mayo 27 de 2023, en horas de la mañana, conductores involucrados MANUEL ALEJANDRO ORDÓÑEZ MENDEZ, y DIEGO MARINO GARCES CAJAS, el cual se tiene que el accidente de tránsito ocurrió en el Barrio Santa Elena de la ciudad de Popayán.

Al respecto, me opongo a las pretensiones indemnizatorias perseguidas por la parte demandante y solicito a su Señoría, que sean desestimadas, puesto que no están llamadas a prosperar, como quiera que de la lectura de la demanda y de sus anexos, se evidencia que la parte demandante pretende el resarcimiento de daños que en su sentir le ocasionó la Fiscalía General de la Nación por una presunta **FALLA EN EL SERVICIO**; presupuesto que no obedece a la realidad, en el caso se predica:

i) hecho exclusivo de un tercero,

ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva,

iii) ausencia de nexo causal entre la actividad de la FGN y los hechos generadores del siniestro, por tanto, se da la de

⁷ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015). Radicación número: 76001-23-31-000-2006-00871-01(36634). Actor: LUIS ARMANDO CARPIO CAICEDO. Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

iv) ausencia de falla en el servicio y

v) la inexistencia de fundamentos que permitan estructurar la responsabilidad patrimonial, extra-patrimonial o administrativa de mi representada, con base en los argumentos que expondré en el acápite de EXCEPCIONES y FUNDAMENTOS Y/O RAZONES DE DERECHO, respectivamente.

El declarar lo contrario sería abrogarle al ente investigador un desacato al articulado constitucional y abuso en el ejercicio de funciones públicas.

"Artículo 121—Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley."

I.1. DECLARATIVAS:

Me opongo, está probado que el Vehículo Automóvil, MARCA KIA, LÍNEA PICANTO EKO TAXI LX, MODELO 2019, COLOR AMARILLO, MOTOR NO. G4LAJP085992, CHASIS KNAB2512AKT374866, DE PLACAS SHT 955, DE SERVICIO PÚBLICO Y AFILIADO A LA TRANSPORTADORA TAXIS, el cual no ingresó a los parqueaderos de la Fiscalía General de la Nación, por tanto, la entidad no tuvo el control, la custodia ni el cuidado real del mismo. Más aún la Denuncia Penal como obra en el Sistema penal Oral Acusatorio SPOA, se hace en la fecha mayo 31 de 2023, es decir, tres (3) días posteriores a su incineración.

Se observa además, que la disposición y entrega del bien era de competencia del Juez de Control de Garantías en Audiencia de entrega provisional de vehículo en delito culposos lesiones personales culposos artículos 120 Código Penal. Con la línea del tiempo se analiza que después de transcurrir un tres (3) días posteriores a su incineración se incoó la denuncia penal, de lo cual mi representada desconocía de la denuncia y estando el vehículo en el parqueadero **Centro Diagnostico Automotor** en atención y por la suscripción de un Contrato Interadministrativo No. 201680001327 de fecha octubre 6 de 2016, entre este particular y el municipio de Popayán, Cauca, se presentó el siniestro de incendio provocado por terceros, es decir en fecha mayo 28 de 2021.

I.2. CONDENATORIAS.

Me opongo, por cuanto la Fiscalía al recibir la denuncia penal debía ordenar inicialmente los actos urgentes, tendientes al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación penal, máxime cuando se trataba de un delito culposos lesiones personales en accidente de tránsito, al igual de no ser la propietaria y estar mal asesorada por el abogado que le asistió a la audiencia de entrega provisional del vehículo ante el Juez constitucional con Fuñones de Control de Garantías manifestó:

Exalta el togado que el automotor se encuentra catalogado como pérdida total dado que se encontraba en las instalaciones del parqueadero del barrio Bolívar que fue objeto de actos vandálicos el 28 de mayo de 2021 (el vehículo fue incinerado) y que, en vista de ello, ofrece como garantía para responder por posibles perjuicios la Póliza de Seguro Extracontractual nro. AA005207 que tiene fecha de vencimiento el 23 de septiembre de 2021. Dicha póliza ha sido expedida por la empresa Equidad Seguros.

Se arguye que debe reclamar a la Aseguradora, y no pretender que el Estado Colombiano lo repare dos (2) veces, surtiéndose así la teoría del enriquecimiento sin causa.

I.2.1. El objetivo de la demanda aunado a las pretensiones de la misma, son netamente reparatorias como consecuencia del incendio ocasionado en el parqueadero de la secretaría municipal el municipio de Popayán, Cauca, el día 28 de mayo de 2021, en desarrollo de protestas.

I.2.2. Para la Fiscalía General de la Nación se presenta la excepción del **hecho de un tercero**, presunto daño reclamado por particulares -protestas que se generaron en vandalismo, así las cosas, el

hecho de un tercero, como ocurrió en el caso en estudio, consiste en la intervención exclusiva de un agente jurídicamente ajeno al demandado, en la producción de un daño, como lo demuestra la parte activa (extremo de la Litis) en el escrito de la demanda medio de control acción de reparación en consecuencia, la FGN no está llamada a responder por los presuntos perjuicios que pretende reclamar la parte actora. Aunado a ello culpa exclusiva de la víctima poseedora del vehículo incinerado.

I.3. CASO FORTUITO

Se presenta en el presente caso una causa extraña que destruye el nexo de causalidad entre la actuación u omisión administrativa y el daño irrogado -o de una causal de exoneración- por lo siguiente:

- 3.1.- Su irresistibilidad;
- 3.2.- Su imprevisibilidad y
- 3.3.- Su exterioridad respecto del demandado.

I.4. Ausencia de falla del servicio imputable a la Fiscalía General de la Nación, ***no basta con atestiguar la concreción de un daño, sino que el mismo, debe ser cierto, personal y sobre todo antijurídico***, siendo elementos esenciales estos, que ante la ausencia de uno de ellos se torna improcedente la indemnización deprecada.

I.5. No hay una relación de causalidad, con ocasión del supuesto daño producido y el actuar del ente acusador, para lo cual es importante apreciar la noción frente al nexo causal – siendo el nexo causal la determinación de que un hecho es la causa de un daño, en esa medida, y en aras de establecer la existencia del nexo causal es necesario determinar si la conducta imputada a la administración fue la causa eficiente y determinante del daño que dicen haber sufrido quienes deciden acudir ante el juez con miras a que les sean restablecidos los derechos conculcados.

I.6. La fiscalía general a través de la dirección seccional de fiscalías del cauca, ha adelantado su función misional y consultada el sistema misional **Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA-**, 190016000601202154197, se encuentra registro en el cual el aquí demandante aparece como indiciado del delito de lesiones personales en accidente de tránsito por los hechos sucedidos el 28 de mayo de 2021.

I.7.- Culpa exclusiva del dueño del vehículo al no ser diligente para recuperar el vehículo, dado que establece que solicito a la Fiscalía General de la Nación la entrega del vehículo, cuando **es conocido que en la solicitud de entrega** dejo la constancia *"frece como garantía para responder por posibles perjuicios la Póliza de Seguro Extracontractual nro. AA005207 que tiene fecha de vencimiento el 23 de septiembre de 2021. Dicha póliza ha sido expedida por la empresa Equidad Seguros"*

Igualmente por la actividad de riesgo, y frente a la teoría de la Previsión el vehículo incinerado cuenta con una póliza contra todo riesgo, a fin de la reclamación ante la presente acción de responsabilidad civil extracontractual que propenda por el resarcimiento de los perjuicios derivados tanto del accidente de tránsito como de su incineración en lugar ajeno a mi representada, puesto que no estaba en los parqueaderos de la Fiscalía, de donde encuentra su principal fundamento en el artículo 2341 del Código Civil, que impone a quien ha cometido delito o culpa infiriendo daño a otro el deber de indemnizarlo.

Es desacertado, entonces, enfocar por el demandante alegando la culpa de la Fiscalía, cuando en el expediente no se tienen actuaciones que la involucren como responsable del incendio el cual ocurrió en un bien inmueble que no es de propiedad de la Fiscalía, lo anterior toda vez que *sólo puede endilgarse de responsabilidad cuando se pruebe el nexo de la causalidad*.

Ahora si una vez agotada el valor estimatorio cancelado por la Compañía de Seguros llamada en Garantía, frente a los múltiples demandas, y se agoten los toques para la indemnización, la Fiscalía itera y solicita se llame a la **Previsora de Seguros**, la cual es la garante del Ente Territorial del municipio de Popayán para la indemnización de los vehículos que han demandado por el mismo hecho ocurrido y aquí debatido, claro está en caso de condena al municipio. Como también a la compañía **Seguros la Equidad**.

El Seguro Voluntario de Automóvil, la garantía de responsabilidad civil voluntaria. Responsabilidad civil y entidades aseguradoras. El derecho de repetición en el seguro del automóvil. Aplican para éstas situaciones presentadas.

Así, la póliza del vehículo contiene una parte que es la correspondiente al tomador y la otra al asegurado, por lo cual debe hacerse énfasis en la salvedad correspondiente en cuanto a daños materiales, y el de responsabilidad por culpa del tomador en el vehículo bien sea por robo, o vandalismo, o incendio.

Finalmente, se solicita en forma respetuosa al Juzgado 4º Contencioso Administrativo de Popayán, que las pretensiones que no se trataron en la conciliación prejudicial, no sean objeto de debate en la Demanda de Reparación Directa, toda vez, que respeto de estos supuestos facticos no se agotó el requisito de procedibilidad que ordena la norma procesal administrativa.

J. FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES

J.1. AL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER. Atendiendo la normatividad vigente, los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal de Cierre en materia de RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PERDIDA DE POSESIÓN O TENENCIA DEL BIEN y la DOCTRINA CONSTITUCIONAL presento las siguientes precisiones:

J.1.1. Inexistencia del daño antijurídico: de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que corresponde al juez de control de garantías impartir legalidad a la inmovilización, incautación y la posterior entrega del bien luego de analizar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas encontrando que las dos iniciales se ajustaban a criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues se investigaba un delito de LESIONES PERSONALES artículo 120 Código Penal.

J.1.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva: de acuerdo al tercer presupuesto de La Sentencia de Unificación del Consejo de Estado, en el sentido de determinar cuál es la autoridad que debe reparar el daño se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la decisión de imponer la medida de suspensión del poder dispositivo es una facultad jurisdiccional atribuida a los jueces de control de garantías como ocurrió en el presente caso. Artículo 100 C.P.P., aunado a que el vehículo en ningún momento ingresó al Parqueadero dispuesto por la FGN para tal fin.

Para reforzar este Petitum Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva, es importante apreciar la respuesta que hace la Fiscalía en cabeza de la doctora Clara Elena Rengifo identificada con la cédula de ciudadanía N° 34.546.605, Administradora de Bienes- del Grupo Seccional Cauca de la Fiscalía General de la Nación, en consideración a oficio sin número fechado 19 de septiembre de 2022, y encontrándose dentro del término legal otorgado, ello a folios 115 a 117 carpeta anexos de la demanda.

J.1.3. Excepción exonerativa de responsabilidad: en el caso en estudio se presenta el hecho de un tercero, pues fue un hecho notorio que un grupo de vándalos y delincuentes atacaron con artefactos explosivos e incendiarios las instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, acciones totalmente ajenas a la entidad que represento. No se observa denuncia en tal sentido, en lo que el demandante refiere que se conocía del posible atentado.

J.1.4. Reclamación administrativa ante Compañías de Seguros:

De otra parte, las entidades del Nivel Territorial debieron adelantar las respectivas reclamaciones ante la Compañía de Seguros tendiente a lograr la indemnización del siniestro presentado por los bienes incinerados. Trámite administrativo que debía realizarse en virtud de las Pólizas Globales Previsora Alcaldías – Seguro Responsabilidad civil, Póliza responsabilidad civil; y la de responsabilidad contractual y extracontractual pactada en el Convenio interadministrativo No. **20161800013327** del 6-10-2016, celebrado entre el Municipio de Popayán y el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán.

J.1.5. HECHOS DE VANDALISMO E INCENDIO.

Son hechos que deben estar garantizados y protegidos con las respectivas pólizas, a fin de salvaguardar el patrimonio público de la entidad territorial como son las Pólizas contra todo riesgo.

Igualmente, se solicita que en la valoración probatoria se tengan de presente las actuaciones jurisdiccionales, de fondo o sustanciales emitidas por el Juez con Funciones de Control de Garantías, propias de las Audiencias Preliminares a saber: legalización de la inmovilización e incautación del vehículo que no son de resorte de la Fiscalía General de la Nación.

K. COSTAS PROCESALES.

Procedo a solicitar muy respetuosamente al Honorable Juez no condenar en costas a la FGN., toda vez, que no están probados los presupuestos del artículo 188 del C.P.A.C.A., de la revisión del proceso penal se tiene que la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de sus funciones, de buena fe, sus actuaciones se desarrollaron al tenor de lo citado en el artículo 6° de la Constitución Política, acatando las garantías constitucionales, el Principio de legalidad, el Debido proceso y sin extralimitación alguna.

Además de lo anterior, no se cumplen las reglas del artículo 365 numeral 8 del Código General del Proceso que dan lugar a las costas, ni se actuó con temeridad o mala fe.

Con relación a lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrada Ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez en sentencia del 5 de agosto de 2010, señaló:

"(...) CONDUCTA TEMERARIA O MALA FE EN EL PROCESO – Existencia

Son deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados, proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, y obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensa y en el ejercicio de los derechos procesales (artículo 71 del C.P.C. – numerales 1° y 2°). Se considera que ha existido temeridad o mala fe cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso (artículo 74 numeral 5° ibídem)"

El Honorable Consejo de Estado por su parte, ha señalado:

"(...) solo cuando el Juez, después de valorar la conducta de las partes, compruebe que hubo uso abusivo de los medios procesales es del caso condenar en costas lo que, contrario sensu, significa que si la conducta procesal fue correcta no es posible acceder a la condena en costas." (Sentencia 25 de mayo de 2006 Subsección B, C. P. Dr. Jesús María Lemos, Radicación N°. 25000-23-25- 000-2001-04955-01 (2427-2004) Demandado: BOGOTÁ D.C.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN).

En el caso en debate no se debe imponer condena en costas, pues no están acreditados los gastos procesales, además no se evidencian actuaciones procesales que ameriten una condena en tal sentido.

Sin embargo, en atención a varios pronunciamientos del Consejo de Estado relacionados con el artículo 188 del CPACA, es decir sin que se haya presentado una sentencia de unificación, también se ha señalado la tesis subjetiva, esto es, que el juez tiene la potestad de determinar la procedencia o no de la condena en costas en contra de la parte que ha visto frustrada sus pretensiones, para que se analice en cada caso particular si hay lugar a imponer costas y agencias en derecho a la parte vencida, tal como lo interpretó el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Magistrado Ponente Alfonso Vargas Rincón, Bogotá 22 de abril de 2015, radicación Nro. 68001233100020130007501 (1648-2014), en donde se dispuso:

"(...) la norma contenida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en costas, solo le da la posibilidad de disponer, esto es, de pronunciarse sobre su procedencia".

Esta misma posición ya había sido expuesta por el Consejo de Estado, Sección primera, Magistrado Ponente Guillermo Vargas Ayala, en sentencia de 16 de abril de 2015, Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00446-01:

"(...) Si bien una lectura rápida de la disposición que antecede, podría llevar a la errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e ineluctable en todos aquellos procesos contencioso administrativos en los cuales se ventile un interés de carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión "dispondrá", lo que en realidad está señalando es que el operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus pretensiones procesales (...). Como quiera que este proceso fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no hay lugar a predicar que sea de aquellos en los cuales se esté ventilando un interés público y bajo esa perspectiva se hace necesario entrar a disponer sobre la condena en costas, por cuanto el interés involucrado en esta instancia es sin lugar a dudas de carácter individual, al estar referido en forma exclusiva a la órbita particular de la parte que promovió el recurso de apelación que ahora se decide."

La posición también había sido acogida con anterioridad por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Magistrado Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, el 19 de enero de 2015, Radicación número: 25000-23-42-000-2012-00701-01(4583-13):

"Debe quedar claro que la referida disposición no impuso al funcionario judicial la obligación de "condenar" en costas, sino la de "disponer" sobre las costas, esto es, la de pronunciarse sobre la procedencia o no de imponerlas. Bajo esta preceptiva, resulta evidente que, si bien en el texto actual que regula la actuación judicial en los asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011) ya no obra la previsión que antaño contenía el artículo 171 del Decreto 1 de 1984, referida a la potestad de imponer condena en costas "...teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes...", también lo es que el nuevo articulado no impone una camisa de fuerza "automática" frente al vencido en el litigio, por lo que, comprendiendo que tal condena es el resultado de una serie de factores tales como, por ejemplo, la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, será el respectivo director del proceso quien, ponderando tales circunstancias, se pronuncie con la debida sustentación sobre su procedencia. Esta interpretación resulta consonante con lo prevenido por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, hoy consignado en el artículo 365 del Código General del Proceso, que dispone que la condena en costas se impondrá en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos "...en que haya controversia...", y "...sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación".

L. FRENTE A LOS HECHOS

L.1. A LAS PRETENSIONES:

La Fiscalía general de la Nación, se opone a la pretensión consistente en el reconocimiento y pago de indemnización por perjuicios inmateriales en los rubros: Morales, daño emergente, del señor **GENTIL**

SANCHEZ OLIVEROS, por hechos sucedidos en la ciudad de Popayán, en la fecha mayo 28 de 2021, como se entrará a probar en el decurso procesal.

Consecuente con lo anterior, esta entidad se opone a la indemnización del Perjudicado directo, reiterando que la Fiscalía en cumplimiento de la Estructura del Proceso Penal, una vez se requirió por el Togado de la parte Accionante solicitó la Celebración de la Audiencia para la Entrega Provisional del Rodante con las características establecidas para el vehículo de Placas SHT - 955, reiterando que la Fiscalía plasma su actuación en cumplimiento de un deber legal por mandato del artículo 250 Superior en armonía con la ley 906 de 2004 y el tipo penal consignado en el artículo 120 del Código Penal.

Conforme a lo anterior se puede argüir que el Funcionario de Policía Judicial que tramita los formatos de policía judicial, lo hace en cumplimiento legal de las funciones y el fin era establecer las características del vehículo involucrado en lesiones personales culposas.

Las pretensiones en el escrito de la demanda detalladas se tienen así:

- 1.- Por perjuicios morales el equivalente a 200 SMLMV. Para la señora ESTHER PINO De SANCHEZ Esposa del aquí demandaste **GENTIL SANCHEZ OLIVEROS**, siendo su pretensión 100 SMLVM, para cada uno.
- 2.- Por perjuicios materiales la suma de \$39.400.000
- 3.- Por lucro consolidado la suma de \$58.300.000
- 4.- Por Lucro cesante futuro la suma de \$3.000.000
- 5.- Por perjuicios morales la suma de "200.000.000, de los cuales se tienen para la señora ESTHER PINO de SANCHEZ Esposa del aquí demandaste **GENTIL SANCHEZ OLIVEROS**, siendo su pretensión 100 SMLVM, para cada uno.

Adicionalmente, téngase en cuenta que, en relación con los perjuicios solicitados, no hay lugar a su declaración, puesto que las actuaciones de mí representada Fiscalía cumple dentro del proceso penal y en cuanto a los términos con su obligación legal que le asiste para esclarecer el accidente, el vehículo nunca entró a los parqueaderos de la Fiscalía, como se demuestra con la prueba que se arrima por parte de la oficina administradora de Bienes y en especial el tema de parqueaderos.

De otra parte, la cuantía establecida en la estimación razonada de la misma, a efectos del reconocimiento de perjuicios para el demandante GENTIL SANCHEZ OLIVEROS, específicamente por cuenta de los perjuicios morales y perjuicios a título de daño emergente, correspondiendo anotar que con la demanda se acompañan ínfimas pruebas que no acreditan totalmente estos perjuicios.

Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente se solicita que de antemano. Aun en caso de una declaratoria de responsabilidad administrativa, despache desfavorablemente la pretensión al reconocimiento y pago de sumas de dinero por estos conceptos.

M. RESPECTO A LOS DAÑOS MORALES – PERJUICIOS INMATERIALES SUJETIVOS

Al señor GENTIL SANCHEZ OLIVEROS en su calidad de víctima directa la suma de dinero equivalente a \$100.000.000 moneda legal colombiana, igual cantidad \$100.000.000, para su Esposa. Las pretensiones no están llamadas a prosperar toda vez que la Fiscalía, no le ha causado daño alguno, si tenemos en cuenta que causa del accidente de tránsito padecido por la persona que en ese momento conducía el vehículo ha tenido otros accidentes.

Dentro del término probatorio se presentarán nuevamente los argumentos tendientes al no reconocimiento de los mismos por parte de su Despacho y en su defecto considerar que no están llamados a prosperar, por la falta del elemento nexo causal y por la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez, que lo evidenciado hasta la fecha es la culpa exclusiva de un tercero. Motivo o razón suficiente para solicitar a su señoría la negación de los mismos.

Igualmente, me opongo a la indemnización cuantificada por daño moral, por cuanto no se ha probado el daño antijurídico, ni se ha establecido que en el actuar de las entidades judiciales haya dolo o culpa grave, al contrario la FGN obró en cumplimiento del deber legal y constitucional. Además estas sumas desbordan los lineamientos de la Sentencia de Unificación emitida por el Consejo de Estado en materia de indemnización por daños o perjuicios morales. Además que el proceso **se encuentra ACTIVO**, es decir, no se tiene certeza jurídica al no haber fallo en contra de la aquí indiciada en materia penal, o que se haya precluido la investigación en virtud de las causales establecidas en el artículo 332 del Estatuto Procesal Penal o que se le haya absuelta en sentencia penal, teniendo la calidad de indiciado su trabajador –TAXISTA- al momento de los hechos correspondientes al accidente de Tránsito.

M.1. OBJECION A LOS PERJUICIOS MATERIALES.-

Respecto a la cuantificación de los **daños materiales** supuestamente ocasionados a la parte actora a **TÍTULO DE DAÑO EMERGENTE**, víctima directa la suma por perjuicios materiales la suma de \$39.400.000, por lucro consolidado la suma de \$58.300.000, por Lucro cesante futuro la suma de \$3.000.000

Se tienen ínfimas pruebas y la llamada a responder en caso de condena de alguna de las entidades demandadas, sería la compañía aseguradora del Ente Territorial como tomador, es decir, la compañía está llamada a que responda en cuanto al llamamiento en garantía que se tiene en este proceso contencioso por reparación directa.

Igualmente me opongo, toda vez que las pretensiones deben ser claras, precisas y estar cuantificadas en el libelo demandatorio desde el agotamiento del requisito de procedibilidad. En caso contrario, no pueden entrarse a demandar los supuestos facticos petitorios de los cuales no se agotó el requisito de procedibilidad que ordena la norma procesal administrativa.

M.2. A LOS HECHOS:

Se determinará del respectivo cotejo probatorio. A lo cual solicito tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación - Seccional Cauca, en materia de vehículos incautados dispone de un **Parqueadero que se encuentra ubicado en la Vereda San Bernardino de la ciudad de Popayán**, al cual ingresan los automotores y otro tipo de bienes rodantes previo el lleno de los requisitos de ley.

Una vez ingresan a dicho parqueadero previo inventario del bien, se expide el Acta respectiva y sólo así queda bajo la guarda y custodia de la entidad Fiscalía.

A los hechos presentados en la demanda no se cumple el requisito exigido en el artículo 167 del CGP., que taxativamente señala que **corresponde a las partes probar los supuestos jurídicos que ellas invocan**, por tanto, solicito a su Despacho que se verifiquen exhaustivamente todas y cada de las pretensiones solicitadas, frente a las actuaciones desplegadas en derecho por los Agentes de Tránsito, la Autoridad Judicial y la FGN, respectivamente, puesto que son circunstancias que se encuentran íntimamente relacionados con los presupuestos facticos que dieron lugar al inicio del presente medio de control.

Al hecho 1º, presentado con la demanda, es CIERTO, teniendo en cuenta los documentos que se adjuntan en el libelo de la demanda y contenido de sus anexos, historial del vehículo

Al hecho 2º, presentado con la demanda, es CIERTO, habida cuenta que se tiene informe de agente de tránsito, adscrito a la Secretaría de Tránsito de Popayán, croquis y reporte de noticia criminal como

primer respondiente, igualmente se cuenta con denuncia penal en el cual el rodante TAXI, del aquí demandante iba conducido por su TRABAJADOR, y se tiene calidad de indiciado.

Al hecho 3º, presentado con la demanda, es CIERTO, así obra en la denuncia penal, igualmente conforme al artículo 67 inciso 2º de la ley 906 de 2004, le asiste responsabilidad por lo cual la denuncia penal es de oficio por su naturaleza.

Al hecho 4º, presentado con la demanda, es CIERTO, la afirmación *"en el parqueadero denominado Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán (CDAP), omitiéndose flagrantemente por parte de LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE POPAYÁN su obligación de ingresarlo al parqueadero que para esos fines cuenta la Fiscalía General de la Nación, ubicado en la ciudad de Popayán sobre la carrera 9N vereda San Bernardino, para cumplir la cadena de custodia, violando así lo establecido en la ley 906 de 2004 y lo relacionado con la cadena de custodia de este macro elemento probatorio"*.

Contrario a esta afirmación no se entiende porque involucró en la demanda a la entidad que represento FGN, con ello se estipula la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Al hecho 5º, presentado con la demanda, es CIERTO, por lo cual nunca estuvo en los parqueadero de la Fiscalía General de la Nación.

A los hechos 6º y 7º, presentados con la demanda, es CIERTO, dadas las pruebas arrimadas con los anexos de la demanda, se aclara que en las pruebas se estableció que la experticia se realizó en el *Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán (CDAP)*.

A los hechos del 6º al 18º, y del 21º al 30º, presentados con la demanda, no me consta. En general se puede argüir que la Fiscalía General de la Nación se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso de referencia, puesto que son circunstancias que precisamente se encuentran íntimamente relacionados con los hechos que dieron lugar al inicio del presente medio de control y por ende deben ser objeto de revisión por su Agencia Judicial; adicionalmente, estos deben ser debida y legamente probados en el desarrollo del mismo, estudiando si son justificantes de la iniciación de la presente reparación directa.

A los hechos 31º, y 32º, presentados con la demanda, no son hechos se trata de requisitos establecidos en el artículo 161 numeral 1º de la ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 92, 94, y 105 de la ley 2022 de 2022.

Al hecho 33º, presentado con la demanda, no es un hecho el poder es un anexo al tenor de los artículos 74 y 84 del Código General del Proceso, los cuales se encuentran en armonía con el artículo 229 Superior.

Los hechos tienen su génesis de conformidad al artículo 167 inciso final establecido en el Código General del Proceso (ley 1564 de 2012), se tiene como un hecho notorio, además de presentarse un Paro a Nivel Nacional. La Rectora del proceso deberá evaluar si la aquí demandante en calidad de Poseedora tiene legitimación en la Causa Por Activa, además de valorar la culpa exclusiva de la víctima.

Además de lo anterior, por ser actuaciones propias de la jurisdicción penal se deben verificar con el expediente que se requerirá a la instancia judicial respectiva. Si el proceso está activo se solicitará certificación en tal sentido, a fin de guardar la reserva sumarial propia del Sistema Adversarial y de Partes.

En cuanto al valor comercial del vehículo que reclama deberá probarse, por cuanto debe aplicarse la depreciación de los vehículos y tener en cuenta elementos como el estado del motor y el consumo de combustible, especialmente porque el auto tenía más de 4 años de antigüedad.

Toda vez que en los diarios locales y nacionales como en las emisoras se informó al respecto, por lo tanto, no puede afirmarse que *"era de público conocimiento que los protestantes tenían la firme intención de incinerar los vehículos acopiados en el parqueadero Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán."*

Puesto que la Fiscalía debe realizar las investigaciones que reúnen características de delitos, como lo establece el artículo 250 Superior, igualmente el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal establece: *"La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente"*.

El Manual de Policía Judicial define la cadena de custodia como un sistema documentado que es aplicado a los elementos materiales probatorios y/o evidencia física por las personas responsables del manejo de los mismos, desde el momento en el cual se encuentran o aportan hasta su disposición final. (Fiscalía General de la Nación, 2005).

La Fiscalía General de la Nación se atiene a los resultados del proceso, previo debate probatorio, igualmente contienen manifestaciones **subjetivas** del apoderado de la parte actora, y por ende deben ser objeto de revisión por su agencia judicial; Adicionalmente, estos deben ser debida y legalmente probados en el desarrollo del mismo, estudiando si son justificantes de la iniciación de la presente acción de reparación directa.

En el presente expediente no obra elemento material probatorio definitivo y concluyente que demuestren que el demandante debe ser acreedor a la indemnización pretendida, toda vez, que al estar directamente relacionado con el ámbito procesal penal, no le consta a la Fiscalía General de la Nación, por lo cual me atengo a lo que resulte probado dentro del proceso, estableciéndose, sin embargo, desde ya, que, en cualquier caso, la mayoría de los hechos deberán ser desvirtuados en el curso del proceso contencioso administrativo, como quiera que a la parte accionante, le asiste la carga de la prueba.

Sea la oportunidad para informar que, existen diferentes clases de responsabilidad por las cuales puede ser investigada una persona: Responsabilidad Fiscal, Civil, Disciplinaria, Penal y Administrativa o Patrimonial, actuación que se realiza al tenor de las normas legales y siguiendo la ritualidad procesal propia.

Finalmente, se reitera que los actos de legalización de inmovilización, incautación, imputación y medida de aseguramiento así como la entrega del bien referido en la demanda son actuaciones que se predicen del Juez de Control de Garantías y no de la Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 250 Superior, desarrollado por la Ley 906 de 2004, tal como lo evidencian los documentos allegados con la acción de reparación directa, al tenor del artículo 100 del C.P.P. inciso final.

N. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITUD DE PRUEBAS PARA HACER VALER

Respetuosamente solicito tener con el valor legal las pruebas solicitadas y aportadas con la contestación de la demanda. Sírvase Su Señoría, tener en cuenta lo siguiente:

N.1. FALTA DE PRUEBAS. No se aporta:

- N.1.** No se acredita o prueban los Daños morales o pretium doloris.
- N.2.** No se acredita o prueban los Daños materiales a título de daño emergente.
- N.3.** No se acredita o prueban los Daños materiales a título de lucro cesante.
- N.4.** No se acredita o prueban los Daños para el lucro consolidado.

Respecto de las pruebas solicitadas y aportadas se solicita tener con el valor legal que le corresponde, que sean analizadas en forma conjunta y a la luz de la Ley 906 de 2004, pues no está probado el daño antijurídico, en caso contrario, estaríamos frente a una causal de exoneración por operancia de una causa ajena a la FGN., a saber: el hecho determinante de un tercero como fueron los facinerosos y desadaptados sociales que dañaron, destrozaron y generaron incendio en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán.

Se adjunta Copia de la denuncia penal con radicado: 190016000601202154197.

N.4. SOLICITADAS:

Oficiar al Centro de Servicios judiciales, a fin de que se sirva enviar copia del proceso penal adelantado en contra del Señor **GENTIL SANCHEZ OLIVEROS**, o identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.517.371 de Popayán, Cauca, incluidos los audios que reposan dentro de la citada investigación, para verificar la veracidad de los hechos contentivos de la demanda de reparación directa y probar que las actuaciones son desplegadas por la autoridad con facultades jurisdiccionales como el Juez de Control de Garantías.

O. EXCEPCIONES

Contra las pretensiones de la demandante propongo:

O.1. EXCEPCIÓNES PREVIAS:

O.1.1.- FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Es una excepción previa a la luz del estatuto instituido en el C.P.A.C.A. en su art.180-numeral 6°.

Lo anterior habida cuenta que el vehículo no entro a la Fiscalía General de la Nación, igualmente las actuaciones realizadas fue la Plena identificación del Vehículo con lo cual la información quedo consignada en el formato FPJ – 13, y se realizó en la fecha mayo 26 de 2021, igualmente las actuaciones realizadas corresponden al cumplimiento de un deber legal en atención al artículo 250 Superior y la ley 906 de 2004.

En conclusión, es clara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, pues la facultad jurisdiccional ya no se encuentra en cabeza de esta Entidad, sino que el titular de dicha facultad según la Ley 906 de 2004, está depositada en la Rama Judicial.

Contra las pretensiones de los demandantes propongo las excepciones previas a la luz de lo instituido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA., en su artículo 180, numeral 6°, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021.

"ARTÍCULO 40. *Modifíquese los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:*

6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver."

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha distinguido entre la **legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material**. La legitimación material es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales.

La legitimación material en la causa exige que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual se examinará desde la óptica de las responsabilidades que legalmente corresponden al organismo demandado.

Así las cosas, en el caso en estudio se predica el fenómeno jurídico procesal de la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, si se parte del concepto de que ésta *"se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material"*. (Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997). Se arriba a esta conclusión, de acuerdo a los considerandos vertidos sobre la inoponibilidad de la relación sustancial examinadas con las facultades que el ordenamiento jurídico asigna a esta institución, pues si según la precitada sentencia la legitimación en la causa es la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute, la misma Corporación sostiene que "... cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella." (Sentencia C-965 de 2003).

Al contrario, desde la presentación y escrito de la demanda está probado que el bien se encontraba en custodia del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, por tanto, al presentarse el siniestro del bien correspondía a tal entidad responder por el vehículo objeto de reclamación, siempre y cuando se determine la debida diligencia y el cuidado por parte del propietario del rodante. Para tal evento el contratista debía constituir la respectiva póliza que ampara la actividad contractual tal como lo estableció el Convenio Interadministrativo No. 20161800013327, en las cláusulas 23 y 26 GARANTÍAS, de fecha 6 de octubre de 2016, firmado por el Municipio de Popayán y el CDAP. Artículo 100 Ley 906 de 2004.

"En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro.

Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido en el término que el funcionario judicial determine y la devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome la decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

La decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. "Resaltado es de mi autoría.

Brilla por su ausencia prueba alguna que demuestre la propiedad que alega la actora del vehículo incinerado, identificado con las placas SHT -955 de acuerdo con lo que dice el texto de la demanda, esa calidad que de acuerdo con el artículo 922⁸ del Código de Comercio, se demuestra con el registro del título de adquisición inscrito ante las oficinas de tránsito (**título y modo**), en

⁸ CAPITULO IV OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Artículo 922. _Tradición de inmuebles y de automotores. La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa. **Parágrafo.** De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. Concordancia: 923, 927, 928; C. Civil 740 a 753, 756, 1849, 1880; C. de P. C. 417

concordancia con los decretos leyes 1344 de 1970 y 1809 de 1990, y las leyes 53 de 1989 y 769 de 2002.

P. LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE INMOVILIZACIÓN E INCAUTACIÓN

Conforme a las citas anteriores la medida al parecer no fue objeto de recurso, la cual fue estudiada en su momento por el Juez de Control de Garantías.

Así, las cosas, solicito a la autoridad judicial administrativa requerir copia de las piezas procesales a la autoridad jurisdiccional en materia penal, a fin de corroborar todos y cada uno de los dichos de la demanda administrativa, a efectos de tomar una decisión acorde a las políticas de Estado, a los Principios de Justicia y Equidad.

Q. HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.

Está probado y fue un hecho notorio que los actos generadores del incendio en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, en fecha mayo 28 de 2021, fueron ejecutados por grupos de vándalos y facinerosos, acciones delictivas totalmente ajenas a la entidad que represento, lo que deviene en ausencia de nexo causal entre el daño presentado y la actividad de la FGN.

La demanda de reparación directa fue interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la investigación y acusación de delitos, desconociendo que la decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. Por tanto es importante que el Juzgado 4º Administrativo que conoce del asunto conforme el Litis consorcio necesario, como es vinculando a la Rama Judicial, a fin de determinar las actuaciones de la Autoridad Jurisdiccional del Estado frente al caso particular y concreto.

Tampoco se evidencia demanda contra los organizadores de las marchas como sería el Comando Nacional de Paro, pues mal puede derivarse responsabilidad estatal a la FGN cuando quienes causaron los daños de incineración fueron terceros ajenos a la entidad que represento FGN, quienes deben ser denunciados, declarados responsables y llamados a responder por los bienes deteriorados, hurtados e incinerados.

R. FALTA DE COMPETENCIA DE FGN EN EL CONTROL DE ACTOS DE VANDALISMO.

No está probado que sea de resorte legal de la FGN., el control de actos de vandalismo, al contrario es una actividad que se presume de la Policía Nacional y del Municipio de Popayán, por ser la autoridad encargada de conceder permisos para adelantar marchar y controlar las protestas.

La primera autoridad policiva, *"tenía a su cargo actuar conforme a la finalidad de la disposición contenida en el Código Nacional de Policía referida precedentemente –planificación y mantenimiento de la seguridad-, ya que se justifica así la necesidad de darle aviso sobre la actividad programada. Por lo anterior, y en ausencia de prueba que demuestre lo contrario, la falta de planeación y dirección por parte de la demandada, permitió que se concretaran los actos vandálicos que afectaron a la comunidad y, en particular, a los demandantes; en consecuencia, al no haberse prestado la seguridad correspondiente respecto de los manifestantes y de quienes se abstuvieron de participar en la jornada, en su calidad de demandado el distrito deberá ser condenado, dado que los demandantes no tenían el deber de soportar el perjuicio irrogado."* Sentencia nº 08001-23-31-000-2000-00213-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2014

Ahora bien la ley 599 de 2000, en su artículo **353A** estableció la Conducta Punible para la obstrucción de vías y como tal frente al Paro Nacional, el Alcalde Municipal de Popayán, Cauca, **debió restringir el**

permiso para llevar a cabo las manifestaciones presentadas, lo cual para mejor ilustración se cita el artículo a su tenor literal:

Ley 599 de 2000. CÓDIGO PENAL

Artículo 353 A. Adicionado por el artículo 44, Ley 1453 de 2011. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

PARÁGRAFO. Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política.

S. EXCEPCIONES DE MÉRITO:

Contra las pretensiones del demandante propongo las siguientes EXCEPCIONES DE MÉRITO, no sin antes aclarar que las actuaciones de la fiscalía se han gestado en cumplimiento de un deber legal y además el proceso por Lesiones personales Culposas artículo 120 Código Penal Ley 599 de 2000, el cual se encuentra **ACTIVO**:

S.1.- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL. Como se explicará a lo largo del presente documento, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, obró de conformidad con la obligación y funciones establecidas en el Artículo 250 de la Carta Política; las disposiciones legales, dentro de éstas el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos, es pertinente entonces afirmar sin lugar a dudas que la actuación de la FGN no adoleció de conductas que pudieran viciar su validez y por ello no puede predicarse no estar ajustada a derecho, ni un **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error**.

Dentro del plenario, y con ocasión del accidente de tránsito, NO HAY prueba de **comportamientos dilatorios o injustificados** en la investigación penal.

Ahora bien, lo relatado hasta este punto, es muestra y prueba del cumplimiento en estricto sentido del Deber Legal que le impone la Constitución Política de 1991 a la Fiscalía General de la Nación como órgano acusador por excelencia, siendo esta causa suficiente para que se rechace la pretensión del actor, consistente en endilgar a la entidad por mi representada un tipo de responsabilidad que genere por orden lógico una reparación administrativa avalada por su despacho.

S.2- INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN o DEL DERECHO RECLAMADO:

Aplicable a la totalidad de las pretensiones con base en todo lo expuesto en esta contestación de demanda, lo cual me remito por celeridad y economía procesal.

S.3.- FALTA DE CAUSA PARA PEDIR: Hace relación a todas las pretensiones y su argumentación se desprende del acápite de la oposición general y específica a las pretensiones, de los fundamentos de derecho, razones de defensa y de lo dicho al contestar los hechos de la demanda.

S.4.- COBRO DE LO NO DEBIDO: No hay lugar al pago de las sumas que se pretenden por la parte actora conforme con lo expuesto en el acápite de oposición a las pretensiones, los fundamentos de

derecho y razones de defensa y lo dicho al contestar los hechos de la demanda. Deberá reclamara a las compañías de Seguro Previsora y la Equidad.

T. COADYUVANCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.

Desde la contestación de la demanda coadyuvo el llamamiento en garantía que debieron hacer las entidades del Nivel territorial como es el Municipio de Popayán y el Centro de Diagnóstico Automotor, incluso del Orden Nacional como la Policía Nacional de Colombia, con ocasión de los hechos ocurridos con el rodante de Placas SHT-955, el día 28 de mayo de 2021, que se encontraba bajo guarda y custodia del contratista en virtud del Convenio Interadministrativo 20161800013327 de 6-10-2016. Que en el evento de haber superado el tope de indemnización se realice el directo llamamiento en garantía a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., por la Póliza número **3000103**, con vigencia técnica entre el 29-04-2021 al 28-06-2021 como Entidad Garante del Municipio de Popayán. Se allega copia de la póliza que cubre el período dentro del cual tuvieron ocurrencia los hechos. Lo anterior, a fin de que si se llegare a derivar algún tipo de responsabilidad por el vehículo en cita sea la compañía garante quien indemnice al demandante.

U. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO COMPLEMENTARIAS A LAS EXCEPCIONES

Como es bien sabido, el artículo 90 de la Carta Política determina que el Estado responderá patrimonialmente por daños, pero no cualquier clase de daños, en ella se señala expresamente que son los denominados **ANTI JURIDICOS**, agregando además "que le sean imputables", causados ya sea por acción o por omisión de las autoridades públicas. Así, la responsabilidad estatal está construida a partir de la existencia de un daño antijurídico y la consideración de antijuridicidad de la conducta o actividad del agente público, carente de título jurídico válido y que excede las obligaciones que debe soportar el individuo como integrante de la sociedad.

En el caso concreto, ninguno de los elementos de la responsabilidad está configurado, como pasa a explicarse:

U.1. INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO.-

Frente a los supuestos de responsabilidad - Falla en el servicio por pérdida posesión o tenencia del bien.

Características del vehículo:

TIPO:	AUTOMOVIL,
MARCA	KIA,
LÍNEA	PICANTO EKO TAXI LX,
MODELO	2019,
COLOR	AMARILLO,
MOTOR NO.	G4LAJP085992,
CHASIS	KNAB2512AKT374866,
DE PLACAS	SHT 955,
DE SERVICIO	PÚBLICO Y AFILIADO A LA TRANSPORTADORA TAXIS POPAYAN

Se tiene en los anexos de la demanda que la medida de inmovilización del vehículo automotor de Placas SHT-955 fue ejecutada por personal adscrito a la Secretaría de Tránsito de Popayán Cauca.

Al respecto se informa que, las autoridades de tránsito que en el ejercicio de la función de policía judicial, de la cual gozan o tienen los agentes de tránsito, con ello se acude al lugar del accidente e inmovilizan el vehículo, deben contar con un sitio o lugar en el cual ubiquen transitoriamente los

rodantes para desarrollar los actos urgentes que la normatividad procesal penal ordena. Este lugar o sitio de parqueo provisional debe ser provisto por el organismo de tránsito correspondiente, pues es éste el que cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de tal labor (grúas y patios) y a quien la ley le asignó la función de realizar los actos urgentes en cumplimiento de sus actividades de policía judicial.

Como es bien sabido, para que se configure responsabilidad patrimonial de las entidades del Estado por sus acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio -entendiéndose este título de imputación como una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficacia o ausencia del servicio, no personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración-, es necesario identificar o determinar claramente las obligaciones que desde el punto de vista legal, están llamadas a cumplir, constituyendo este aspecto la piedra angular para poder establecer si frente a un caso concreto una entidad tiene el deber jurídico de asumir patrimonialmente, las consecuencias de su actividad judicial, reguladas y permitidas por el ordenamiento jurídico.

Al analizarse el caso específico a la luz de los principios y criterios que informan la **falla del servicio**, se tiene que en el caso en litigio, **ésta no se presentó**, pues todo el proceso penal adelantado en su contra se ciñó a la ritualidad procesal consagrada en la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal vigente para la época y lugar de los hechos, por lo que la actuación de mi representada, la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, fue ajustada a Derecho.

Es necesario recordar que la jurisprudencia ha señalado que para que exista indemnización de perjuicios la falla ha de ser de tal magnitud que, teniendo en cuenta las circunstancias en que debe prestarse el servicio, la conducta de la administración sea considerada como anormalmente deficiente, lo cual fue manifestado en los siguientes términos por el Consejo de Estado en **Sentencia del 5 de agosto de 1994**, expediente 8485, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, así:

"...Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el estado con su obligación..."

"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad, que teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente".

En punto de los requisitos necesarios para que se presente la Falla, el Consejo de Estado ha dicho:

"...Cuando el Estado en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada "falta o falla del servicio", o mejor aún falta o falla de la administración, tratándose de simples actuaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y requiere:

- a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio, la falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración;*
- b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;*
- c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para que el daño sea indemnizable como que sea cierto, determinado o determinable, etc.;*

d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio no habrá lugar a la indemnización.⁹

En el caso que nos ocupa, no se incurrió en ninguna falla que tenga la virtud para que se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda que se contesta por el presente memorial, ni para que se le impute a la Fiscalía General de la Nación perjuicio, por las siguientes razones:

La actuación de la Fiscalía General de la Nación, se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error.**

Es preciso recordar que la Fiscalía General de la Nación fue creada por inspiración constitucional, teniendo precisas funciones que cumplir, las que además se determinan entre otros ordenamientos en el estatuto procedimental penal. En el derecho colombiano, la regla general consiste en que las obligaciones a cargo de la administración, como consecuencia del principio constitucional contenido en el Artículo 6.-, deben ser determinadas, especificadas por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo corresponda ejecutar.

En este orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación, en el caso en estudio, obró de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 de la Carta.

V. ACLARACIÓN FRENTE A LA ESTIPULACIÓN DEL PARÁGRAFO 1º DEL ART.175 DEL C.P.A.C.A

En relación con la advertencia y/o exigibilidad que se imparte en el párrafo primero del artículo 175 del CPACA, aclaro que como quiera que se trata de un proceso penal se adjunta formato único de noticia criminal incoada en la fecha mayo 31 de 2021 Posterior a los hechos de mayo 28 de 2021, fecha en que el vehículo aquí referenciado fue incinerado – se itera la falta de legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto.

W. PETICIÓN

Sean las anteriores, razones suficientes por las que respetuosamente me permito solicitar se procure un fallo que deniegue todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda contra mi representada, y se declaren las excepciones propuestas.

En conclusión, no configurándose ningún daño antijurídico ni falla del servicio ni error judicial, por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, ruego al despacho proferir sentencia que absuelva de todo tipo de responsabilidad a mi representada.

X. ANEXOS

Acompaño al presente memorial los siguientes:

1. Poder debidamente conferido al suscrito conforme al artículo 5 ley 2213 de 2022
2. Copia de la Resolución de Nombramiento y Acta de Posesión de quien otorga poder
- 3.- Formato de noticia criminal Delito Lesiones Culposas artículo 120 Código Penal Colombiano.
- 4.- Sentencia No. 141, proferida por el Juzgado 1º Contencioso Administrativo Circuito de Popayan, precedente Horizontal – fecha septiembre 8 de 2023, Expediente: 19001333300120220013300, Demandante: CARMINA CASTILLO NAVARRO - OTROS, Demandados: Municipio de Popayán;

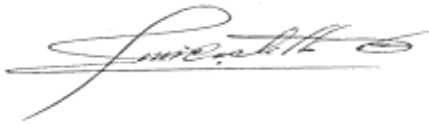
⁹ Bogotá D.E., 28 DE OCTUBRE DE 1976 Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado. Consejero Ponente: Dr. Jorge Valencia Arango. Referencia Exp 1482.

Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán; Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
- Ejército Nacional – Otros, Medio de Control: **ACCIÓN DE GRUPO**

Y. NOTIFICACIONES PERSONALES Y COMUNICACIONES PROCESALES

Mi representada y el suscrito profesional en: Calle 3 No.2-76 Barrio La Pamba – Oficina Dirección de Asuntos Jurídicos FGN Popayán. Igualmente a través de los correos: para notificaciones judiciales: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; elier.castillo@fiscalia.gov.co

De la Honorable Juez,



ELIER ERNEY CASTILLO CARDENAS

C.C. 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao C.

T.P. 140.187 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura.

Honorable Juez
Doctora CARMEN YANETH ZAMBRANO HINESTROZA.
JUZGADO QUINTO (4º) ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
E. S. D.
Popayán Cauca

Ref.: EXCEPCIONES
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Proceso No.: 19001333300420230005800
Actor: GENTIL SANCHEZ OLIVEROS – OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y OTRO

ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS, mayor, domiciliado en la ciudad de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao, Cauca, Popayán Cauca, con Tarjeta Profesional número 99.529 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Nit. 800.152.783-2**, de conformidad con el poder que adjunto con sus respectivos anexos, con todo respeto y oportunamente, procedo por medio del presente escrito a presentar **EXCEPCIONES** a la demanda que concita el asunto *sub examine*, así:

A. OPORTUNIDAD

Presento escrito de **EXCEPCION PREVIA**, dentro del término establecido en el Artículo 201A de la ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 101 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012).

B. EXCEPCION(ES) PROPUESTA(S)

Contra las pretensiones del demandante propongo las **EXCEPCIONES PREVIAS**:

1.- FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

C. RAZONES Y HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTAN

Es una excepción previa a la luz del estatuto instituido en el C.P.A.C.A. en su art.180-numeral 6º.

Lo anterior habida cuenta que el vehículo no entro a la Fiscalía General de la Nación, igualmente las actuaciones realizadas fue la Plena identificación del Vehículo con lo cual la información quedo consignada en el formato FPJ – 13, y se realizó en la fecha mayo 26 de 2021, igualmente las actuaciones realizadas corresponden al cumplimiento de un deber legal en atención al artículo 250 Superior y la ley 906 de 2004.

En conclusión, es clara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, pues la facultad jurisdiccional ya no se encuentra en cabeza de esta Entidad, sino que el titular de dicha facultad según la Ley 906 de 2004, está depositada en la Rama Judicial.

Contra las pretensiones de los demandantes propongo las excepciones previas a la luz de lo instituido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA., en su artículo 180, numeral 6º, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021.

"ARTÍCULO 40. *Modifíquese los numerales 6, 8 y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónense dos párrafos al mismo artículo, así:*

6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver."

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha distinguido entre la **legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material**. La legitimación material es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales.

La legitimación material en la causa exige que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual se examinará desde la óptica de las responsabilidades que legalmente corresponden al organismo demandado.

Así las cosas, en el caso en estudio se predica el fenómeno jurídico procesal de la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, si se parte del concepto de que ésta *"se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material"*. (Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997). Se arriba a esta conclusión, de acuerdo a los considerandos vertidos sobre la inoponibilidad de la relación sustancial examinadas con las facultades que el ordenamiento jurídico asigna a esta institución, pues si según la precitada sentencia la legitimación en la causa es la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute, la misma Corporación sostiene que "... cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella." (Sentencia C-965 de 2003).

Al contrario, desde la presentación y escrito de la demanda está probado que el bien se encontraba en custodia del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, por tanto, al presentarse el siniestro del bien correspondía a tal entidad responder por el vehículo objeto de reclamación, siempre y cuando se determine la debida diligencia y el cuidado por parte del propietario del rodante. Para tal evento el contratista debía constituir la respectiva póliza que ampara la actividad contractual tal como lo estableció el Convenio Interadministrativo No. 20161800013327, en las cláusulas 23 y 26 GARANTÍAS, de fecha 6 de octubre de 2016, firmado por el Municipio de Popayán y el CDAP. Artículo 100 Ley 906 de 2004.

"En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro.

Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas sobre lo producido en el término que el funcionario judicial determine y la devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega hasta tanto no se tome la decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.

La decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. Resaltado es de mi autoría.

Brilla por su ausencia prueba alguna que demuestre la propiedad que alega la actora del vehículo incinerado, identificado con las placas SHT -955 de acuerdo con lo que dice el texto de la demanda, esa calidad que de acuerdo con el artículo 922¹ del Código de Comercio, se demuestra con el

¹ CAPITULO IV OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Artículo 922. _Tradición de inmuebles y de automotores. La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.

registro del título de adquisición inscrito ante las oficinas de tránsito (**título y modo**), en concordancia con los decretos leyes 1344 de 1970 y 1809 de 1990, y las leyes 53 de 1989 y 769 de 2002.

A. LA LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE INMOVILIZACIÓN E INCAUTACIÓN

Conforme a las citas anteriores la medida al parecer no fue objeto de recurso, la cual fue estudiada en su momento por el Juez de Control de Garantías.

Así, las cosas, solicito a la autoridad judicial administrativa requerir copia de las piezas procesales a la autoridad jurisdiccional en materia penal, a fin de corroborar todos y cada uno de los dichos de la demanda administrativa, a efectos de tomar una decisión acorde a las políticas de Estado, a los Principios de Justicia y Equidad.

B. HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.

Está probado y fue un hecho notorio que los actos generadores del incendio en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán, en fecha mayo 28 de 2021, fueron ejecutados por grupos de vándalos y facinerosos, acciones delictivas totalmente ajenas a la entidad que represento, lo que deviene en ausencia de nexo causal entre el daño presentado y la actividad de la FGN.

La demanda de reparación directa fue interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la investigación y acusación de delitos, desconociendo que la decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde, en todos los casos, al juez de control de garantías. Por tanto es importante que el Juzgado 4º Administrativo que conoce del asunto conforme el Litis consorcio necesario, como es vinculando a la Rama Judicial, a fin de determinar las actuaciones de la Autoridad Jurisdiccional del Estado frente al caso particular y concreto.

Tampoco se evidencia demanda contra los organizadores de las marchas como sería el Comando Nacional de Paro, pues mal puede derivarse responsabilidad estatal a la FGN cuando quienes causaron los daños de incineración fueron terceros ajenos a la entidad que represento FGN, quienes deben ser denunciados, declarados responsables y llamados a responder por los bienes deteriorados, hurtados e incinerados.

C. FALTA DE COMPETENCIA DE FGN EN EL CONTROL DE ACTOS DE VANDALISMO.

No está probado que sea de resorte legal de la FGN., el control de actos de vandalismo, al contrario es una actividad que se presume de la Policía Nacional y del Municipio de Popayán, por ser la autoridad encargada de conceder permisos para adelantar marchar y controlar las protestas.

La primera autoridad policiva, "tenía a su cargo actuar conforme a la finalidad de la disposición contenida en el Código Nacional de Policía referida precedentemente –planificación y mantenimiento de la seguridad-, ya que se justifica así la necesidad de darle aviso sobre la actividad programada. Por lo anterior, y en ausencia de prueba que demuestre lo contrario, la falta de planeación y dirección por parte de la demandada, permitió que se concretaran los actos vandálicos que afectaron a la comunidad y, en particular, a los demandantes; en consecuencia, al no haberse prestado la seguridad correspondiente respecto de los manifestantes y de quienes se abstuvieron de participar en la jornada, en su calidad de demandado el distrito deberá ser condenado, dado que los demandantes no tenían el deber de soportar el perjuicio irrogado." Sentencia nº 08001-23-31-000-2000-00213-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Noviembre de 2014

Parágrafo. *De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. Concordancia: 923, 927, 928; C. Civil 740 a 753, 756, 1849, 1880; C. de P. C. 417*

Ahora bien la ley 599 de 2000, en su artículo **353A** estableció la Conducta Punible para la obstrucción de vías y como tal frente al Paro Nacional, el Alcalde Municipal de Popayán, Cauca, **debió restringir el permiso para llevar a cabo las manifestaciones presentadas**, lo cual para mejor ilustración se cita el artículo a su tenor literal:

Ley 599 de 2000. CÓDIGO PENAL. Artículo 353 A. *Adicionado por el artículo 44, Ley 1453 de 2011.* Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. *El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo*, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

PARÁGRAFO. *Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política.*

D. EXCEPCIONES DE MÉRITO:

Contra las pretensiones del demandante propongo las siguientes EXCEPCIONES DE MÉRITO, no sin antes aclarar que las actuaciones de la fiscalía se han gestado en cumplimiento de un deber legal y además el proceso por Lesiones personales Culposas artículo 120 Código Penal Ley 599 de 2000, el cual se encuentra **ACTIVO**:

S.1.- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL. Como se explicará a lo largo del presente documento, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, obró de conformidad con la obligación y funciones establecidas en el Artículo 250 de la Carta Política; las disposiciones legales, dentro de éstas el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales penales vigentes para la época de los hechos, es pertinente entonces afirmar sin lugar a dudas que la actuación de la FGN no adoleció de conductas que pudieran viciar su validez y por ello no puede predicarse no estar ajustada a derecho, ni un **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error**.

Dentro del plenario, y con ocasión del accidente de tránsito, NO HAY prueba de **comportamientos dilatorios o injustificados** en la investigación penal.

Ahora bien, lo relatado hasta este punto, es muestra y prueba del cumplimiento en estricto sentido del Deber Legal que le impone la Constitución Política de 1991 a la Fiscalía General de la Nación como órgano acusador por excelencia, siendo esta causa suficiente para que se rechace la pretensión del actor, consistente en endilgar a la entidad por mi representada un tipo de responsabilidad que genere por orden lógico una reparación administrativa avalada por su despacho.

S.2.- INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN o DEL DERECHO RECLAMADO:

Aplicable a la totalidad de las pretensiones con base en todo lo expuesto en esta contestación de demanda, lo cual me remito por celeridad y economía procesal.

S.3.- FALTA DE CAUSA PARA PEDIR: Hace relación a todas las pretensiones y su argumentación se desprende del acápite de la oposición general y específica a las pretensiones, de los fundamentos de derecho, razones de defensa y de lo dicho al contestar los hechos de la demanda.

S.4.- COBRO DE LO NO DEBIDO: No hay lugar al pago de las sumas que se pretenden por la parte actora conforme con lo expuesto en el acápite de oposición a las pretensiones, los fundamentos de

derecho y razones de defensa y lo dicho al contestar los hechos de la demanda. Deberá reclamara a las compañías de Seguro Previsora y la Equidad.

E. COADYUVANCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.

Desde la contestación de la demanda coadyuvo el llamamiento en garantía que debieron hacer las entidades del Nivel territorial como es el Municipio de Popayán y el Centro de Diagnóstico Automotor, incluso del Orden Nacional como la Policía Nacional de Colombia, con ocasión de los hechos ocurridos con el rodante de Placas SHT-955, el día 28 de mayo de 2021, que se encontraba bajo guarda y custodia del contratista en virtud del Convenio Interadministrativo 20161800013327 de 6-10-2016. Que en el evento de haber superado el tope de indemnización se realice el directo llamamiento en garantía a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., por la Póliza número **3000103**, con vigencia técnica entre el 29-04-2021 al 28-06-2021 como Entidad Garante del Municipio de Popayán. Se allega copia de la póliza que cubre el período dentro del cual tuvieron ocurrencia los hechos. Lo anterior, a fin de que si se llegare a derivar algún tipo de responsabilidad por el vehículo en cita sea la compañía garante quien indemnice al demandante.

F. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO COMPLEMENTARIAS A LAS EXCEPCIONES

Como es bien sabido, el artículo 90 de la Carta Política determina que el Estado responderá patrimonialmente por daños, pero no cualquier clase de daños, en ella se señala expresamente que son los denominados **ANTI JURIDICOS**, agregando además “que le sean imputables”, causados ya sea por acción o por omisión de las autoridades públicas. Así, la responsabilidad estatal está construida a partir de la existencia de un daño antijurídico y la consideración de antijuridicidad de la conducta o actividad del agente público, carente de título jurídico válido y que excede las obligaciones que debe soportar el individuo como integrante de la sociedad.

En el caso concreto, ninguno de los elementos de la responsabilidad está configurado, como pasa a explicarse:

U.1. INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO.-

Frente a los supuestos de responsabilidad - Falla en el servicio por pérdida posesión o tenencia del bien.

Características del vehículo:

TIPO:	AUTOMOVIL,
MARCA	KIA,
LÍNEA	PICANTO EKO TAXI LX,
MODELO	2019,
COLOR	AMARILLO,
MOTOR NO.	G4LAJP085992,
CHASIS	KNAB2512AKT374866,
DE PLACAS	SHT 955,
DE SERVICIO	PÚBLICO Y AFILIADO A LA TRANSPORTADORA TAXIS POPAYAN

Se tiene en los anexos de la demanda que la medida de inmovilización del vehículo automotor de Placas SHT-955 fue ejecutada por personal adscrito a la Secretaría de Tránsito de Popayán Cauca.

Al respecto se informa que, las autoridades de tránsito que en el ejercicio de la función de policía judicial, de la cual gozan o tienen los agentes de tránsito, con ello se acude al lugar del accidente e inmovilizan el vehículo, deben contar con un sitio o lugar en el cual ubiquen transitoriamente los rodantes para desarrollar los actos urgentes que la normatividad procesal penal ordena. Este lugar o sitio de parqueo provisional debe ser provisto por el organismo de tránsito correspondiente, pues es

éste el que cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de tal labor (grúas y patios) y a quien la ley le asignó la función de realizar los actos urgentes en cumplimiento de sus actividades de policía judicial.

Como es bien sabido, para que se configure responsabilidad patrimonial de las entidades del Estado por sus acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio -entendiéndose este título de imputación como una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficacia o ausencia del servicio, no personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración-, es necesario identificar o determinar claramente las obligaciones que desde el punto de vista legal, están llamadas a cumplir, constituyendo este aspecto la piedra angular para poder establecer si frente a un caso concreto una entidad tiene el deber jurídico de asumir patrimonialmente, las consecuencias de su actividad judicial, reguladas y permitidas por el ordenamiento jurídico.

Al analizarse el caso específico a la luz de los principios y criterios que informan la **falla del servicio**, se tiene que en el caso en litigio, **ésta no se presentó**, pues todo el proceso penal adelantado en su contra se ciñó a la ritualidad procesal consagrada en la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal vigente para la época y lugar de los hechos, por lo que la actuación de mi representada, la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, fue ajustada a Derecho.

Es necesario recordar que la jurisprudencia ha señalado que para que exista indemnización de perjuicios la falla ha de ser de tal magnitud que, teniendo en cuenta las circunstancias en que debe prestarse el servicio, la conducta de la administración sea considerada como anormalmente deficiente, lo cual fue manifestado en los siguientes términos por el Consejo de Estado en **Sentencia del 5 de agosto de 1994**, expediente 8485, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, así:

"...Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el estado con su obligación..."

"La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad, que teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como "anormalmente deficiente".

En punto de los requisitos necesarios para que se presente la Falla, el Consejo de Estado ha dicho:

"...Cuando el Estado en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada "falta o falla del servicio", o mejor aún falta o falla de la administración, tratándose de simples actuaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y requiere:

- a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio, la falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración;*
- b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;*
- c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para que el daño sea indemnizable como que sea cierto, determinado o determinable, etc.;*
- d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio no habrá lugar a la indemnización.²*

² Bogotá D.E., 28 DE OCTUBRE DE 1976 Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado. Consejero Ponente: Dr. Jorge Valencia Arango. Referencia Exp 1482.

En el caso que nos ocupa, no se incurrió en ninguna falla que tenga la virtud para que se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda que se contesta por el presente memorial, ni para que se le impute a la Fiscalía General de la Nación perjuicio, por las siguientes razones:

La actuación de la Fiscalía General de la Nación, se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un **defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error.**

Es preciso recordar que la Fiscalía General de la Nación fue creada por inspiración constitucional, teniendo precisas funciones que cumplir, las que además se determinan entre otros ordenamientos en el estatuto procedimental penal. En el derecho colombiano, la regla general consiste en que las obligaciones a cargo de la administración, como consecuencia del principio constitucional contenido en el Artículo 6.-, deben ser determinadas, especificadas por las leyes o los reglamentos que se expidan para precisar las funciones que a cada organismo administrativo corresponda ejecutar.

En este orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación, en el caso en estudio, obró de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 de la Carta.

A. PRUEBAS

Ruego se tengan como tales, las aportadas con la demanda y la contestación y que reposan en el proveído del expediente, como también la(s) solicitada(s) en la misma contestación por parte de esta entidad.

B. PETICIÓN

Sean las anteriores, razones suficientes por las que respetuosamente me permito solicitar se procure un fallo que deniegue todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda contra mi representada.

En conclusión, no configurándose ningún daño antijurídico ni falla del servicio de la Fiscalía General de la Nación, ruego al despacho proferir sentencia que absuelva de todo tipo de responsabilidad a mi representada.

C. NOTIFICACIONES PERSONALES Y COMUNICACIONES PROCESALES

Mi representada y el suscrito profesional, recibiremos en: Calle 3 No.2-76 Barrio La Pamba, Popayán, Dirección de Asuntos Jurídicos Cauca de la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente a través de los correos: para notificaciones judiciales: jur.novedades@fiscalia.gov.co; elier.castillo@fiscalia.gov.co

De la Honorable Juez,



ELIER ERNEY CASTILLO CARDENAS

C.C. 10.480.196 expedida en Santander de Quilichao C.

T.P. 140.187 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura.



Buen día

Respetuosamente se remite(n) 2 poder (s), de acuerdo a lo definido en el Artículo 5 de la **LEY 2213 DE 2022**, que establece:

"ARTÍCULO 5°. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados." Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales."

Cordialmente,

poderesDAJ@fiscalia.gov.co

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Señor

**JUEZ 4º ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
E.S.D.**

**MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: GENTIL SANCHEZ OLIVEROS Y OTRO
RADICADO: 19001333300420230005800**

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO, domiciliada en la Ciudad de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.881.383 de Arjona – Bolívar, en calidad de Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, debidamente designada mediante oficio 20221500004773 del 30 de marzo de 2022, en los términos de la delegación efectuada por el Señor **FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN**, mediante el artículo décimo de la Resolución N° 0-0259 del 29 de marzo de 2022, documentos que anexo al presente escrito, atentamente manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al Doctor **ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS**, abogado en ejercicio, portador de la C.C. No. 10.480.196 de Santander de Quilichao, T.P. No. 140.187 del C.S.J., para que represente a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** en el proceso de la referencia.

El doctor **ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS** queda investido de las facultades consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso y en especial para, sustituir conciliar total o parcialmente, recibir, presentar recursos ordinarios y extraordinarios y en general para adelantar las diligencias tendientes al cabal desarrollo del presente mandato.

Solicito respetuosamente se reconozca personería al Doctor **ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS**, en los términos y para los fines que confiere el presente poder.

El correo institucional del abogado es elier.castillo@fiscalia.gov.co, el correo electrónico para notificaciones judiciales, comunicaciones, citaciones, traslados o



cualquier otra actuación que se realice a través de un mensaje de datos es jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

De Usted,

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO

Coordinadora Unidad de Defensa Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos

Acepto:

ELIER ERNEY CASTILLO CÁRDENAS

C. C. No. 10.480.196 de Santander de Quilichao
T. P. No. 140.187 del C. S. J.

Elaboró Rocio Rojas R.-

6-9-23



Radicado No. 20181500002733
Oficio No. DAJ-10400-
04/04/2018
Página 1 de 1

Bogotá D.C., 04 de abril de 2018

Doctora
SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Dirección de Asuntos Jurídicos
Fiscalía General de la Nación
Ciudad

ASUNTO: RATIFICACIÓN DE FUNCIONES COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DEFENSA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Respetada doctora Sonia,

Con ocasión de la expedición de la Resolución No. 0303 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual el Fiscal General de la Nación "establece la organización interna de la Dirección de Asuntos Jurídicos", y con el fin de dar continuidad a la función de coordinación que viene desempeñando, de manera atenta me permito ratificar su designación como Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Las funciones asignadas a la mencionada Unidad se encuentran consagradas en el artículo 3° de la Resolución No. 0303 del 20 de marzo de 2018, por medio de la cual el Fiscal General de la Nación estableció la organización interna de esta Dirección.

Cordialmente,


MYRIAM STELLA ORTIZ QUINTERO
Directora de Asuntos Jurídicos
Fiscalía General de la Nación

Proyectó: Johanna Pinto García 



RESOLUCIÓN No. 00863

18 MAR. 2016

“Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad”

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN,

En uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente las previstas en el artículo 251, numeral 2º, de la Constitución Política y en los artículos 4º, numeral 22, del Decreto Ley 016 de 2014 y 11 del Decreto Ley 020 de 2014.

CONSIDERANDO

Que el Fiscal General de la Nación tiene competencia constitucional y legal para nombrar y remover a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el numeral 22 del artículo 4º del Decreto Ley 016 de 2014 faculta al Fiscal General de la Nación para nombrar y remover al Vicefiscal General de la Nación y demás servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y decidir sobre sus situaciones administrativas.

Que el Decreto Ley 017 de 2014 define los niveles jerárquicos, modifica la nomenclatura y establece las equivalencias y requisitos generales para los empleos de la Entidad.

Que la resolución 0-0470 del 2 de abril de 2014, modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los Empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y establece otras disposiciones.

Que el párrafo 1 del artículo 2º del Decreto Ley 018 de 2014 establece que el Fiscal General de la Nación distribuirá los cargos de las plantas en cada una de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes, las estrategias y los programas de la entidad.

Que el artículo 11 del Decreto Ley 020 de 2014, señala las clases de nombramientos al interior de la entidad, disponiendo en el numeral 3 como uno de ellos la provisionalidad *“Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción vacantes de manera temporal cuando el titular no este percibiendo la remuneración, mientras dure la situación administrativa. // Los cargos de carrera especial vacantes de manera definitiva también podrán proveerse mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección”*.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la resolución 0-0787 del 9 de abril de 2014, el Despacho del Fiscal General de la Nación, verificó que la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, cumple con los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que de acuerdo con el Decreto Ley 018 de 2014, el empleo en el que se nombra a la doctora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, pertenece a la planta global del área Administrativa y será ubicado en la Dirección Jurídica, por necesidades del servicio.

Que en mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Nombrar en provisionalidad en el cargo de **PROFESIONAL EXPERTO** en la Dirección Jurídica a la doctora ****SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, con cédula de ciudadanía No. **30.881.383**.

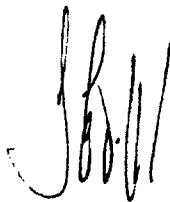
ARTÍCULO 2º. El nombramiento deberá ser comunicado a la interesada por el Departamento de Administración de Personal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del acto administrativo, para que, dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la comunicación, manifieste su decisión, y deberá tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la aceptación.

ARTÍCULO 3º. La nombrada tomará posesión del cargo ante el **Subdirector de Talento Humano o el Jefe del Departamento de Administración de Personal**, acreditando que reúne los requisitos exigidos para tal efecto.



ARTÍCULO 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **18 MAR. 2016**



EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de la Nación

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Angela Viviana Mendoza Barbosa		16 de marzo de 2016
Revisó:	Shelly Alexandra Duarte Rojas		16 de marzo de 2016
Aprobó:	Rocio del Pilar Forero Garzón		16 de marzo de 2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma



005542

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 5 de Abril de 2016, se presentó en el Departamento de Administración de Personal de la Subdirección Nacional de Talento Humano, la señora **SONIA MILENA TORRES CASTAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 30.881.383**, con el fin de tomar posesión del cargo de **PROFESIONAL EXPERTO**, en la Dirección Jurídica, nombramiento efectuado mediante Resolución **No. 0-0863** del 18 de marzo de 2016.

Prestó el juramento de rigor conforme a los preceptos legales, por cuya gravedad se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes que el cargo le impone. Igualmente, se le enteró del artículo 60. de la Ley 190 de 1995.

Para esta posesión se presentó la siguiente documentación:

- Carta de Aceptación
- Certificado Antecedentes de Policía Nacional
- Certificado de Responsabilidad Fiscal Contraloría
- Certificado Antecedentes Disciplinarios Procuraduría
- Certificado de Deudores Morosos
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados
- Copia de la Tarjeta Profesional

Para constancia, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

NELBI YOLANDA ARENAS HERREÑO

Jefe Departamento Administración de Personal (E)

SONIA MILENA TORRES CASTAÑO
Posesionada

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE LA COPIA
QUE REPOSA EN EL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DRL/ Leticia Beltrán R.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DIAGONAL 228 (AVDA. LOS CARLOS GALÁN) No. 52-01 BLOQUE C PISO 4 BOGOTÁ

CON MUTADOR 5702000 - 4149000 Exts. 2064

WWW.FISCALIA.GOV.CO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.480.196
CASTILLO CARDENAS

APellidos
ELIER ERNEY

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1958
SANTANDER DE QUILICHAO
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 0+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-MAR-1977 SANTANDER DE QUILICHAO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL RAMIREZ TORRES

[Barcode]

A-1107800-00435-482 M-0010480196-20130511 0033012048A.2 7762157276

240329 REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

140187 07/06/2005 15/04/2005
Tarjeta No. Fecha de Expedición Fecha de Grado

ELIER ERNEY
CASTILLO CARDENAS
10480196 CAUCA
Cedula Consejo Seccional

COOPERATIVA BOGOTA
Universidad

[Signature]
Presidente Consejo Superior
de la Judicatura

[Portrait Photo]

[Signature]

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/may/2021
HORA: 12:16:54
DEPARTAMENTO: Cauca
MUNICIPIO: POPAYÁN

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 190016000601202154197
DEPARTAMENTO: 19 - Cauca
MUNICIPIO: 001 - POPAYÁN
ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación
UNIDAD RECEPTORA: 00601 - UNIDAD RECEPTORA SAU POPAYAN
AÑO: 2021
CONSECUTIVO: 54197

TIPO DE NOTICIA

TIPO DE NOTICIA: QUERELLA
DELITO REFERENTE: 571 - LESIONES CULPOSAS ART. 120 C.P. MEDIO
MOTORIZADO INCISO 2
MODO DE OPERACIÓN DEL
DELITO:
GRADO DEL DELITO: Ninguno
LEY DE APLICABILIDAD: Ley 906

AUTORIDADES

EL USUARIO ES REMITIDO
POR UNA ENTIDAD ? SI
FECHA: 31/may/2021
HORA: 08:20:00
CUAL ? ALCALDIA
NOMBRE DE QUIEN REMITE: GUSTAVO ADOLFO HOYOS GIL
CARGO: AGENTE DE TRANSITO

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS
Y PERJUICIOS (EN DELITOS 0
CONTRA EL PATRIMONIO):

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

PRIMER NOMBRE: GUSTAVO

SEGUNDO NOMBRE: ADOLFO
PRIMER APELLIDO: HOYOS
SEGUNDO APELLIDO: GIL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD CEDULA DE CIUDADANIA
- CLASE:
Nº.: 10298640
GÉNERO: HOMBRE
TELÉFONO MÓVIL: 3137936206
CORREO ELECTRÓNICO: GUSTAVOHOYOS2383@GMAIL.COM
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS
Y PERJUICIOS (EN DELITOS 0
CONTRA EL PATRIMONIO):

DATOS DE LA VICTIMA
CUANDO NO ES EL MISMO DENUNCIANTE

PRIMER NOMBRE: MANUEL
SEGUNDO NOMBRE: ALEJANDRO
PRIMER APELLIDO: ORDOÑEZ
SEGUNDO APELLIDO: MENDEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD CEDULA DE CIUDADANIA
- CLASE:
Nº.: 10302993
EDAD: 38
GÉNERO: HOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO: 27/ago/1982
TELÉFONO MÓVIL: 3113722314

Se informa a la víctima el contenido de los artículos 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de víctima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

DATOS DEL INDICIADO

PRIMER NOMBRE: DIEGO
SEGUNDO NOMBRE: MARINO
PRIMER APELLIDO: GARCES
SEGUNDO APELLIDO: CAJAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD CEDULA DE CIUDADANIA
- CLASE:
Nº.: 76223113
EDAD: 54
GÉNERO: HOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO: 12/ene/1967
TELÉFONO MÓVIL: 3127641728

BIENES RELACIONADOS CON EL CASO

VEHÍCULOS

INTERVINIENTE:	
TIPO VINCULACION:	OBJETO MATERIAL DEL ILICITO
MARCA:	HONDA
PLACA:	QWA34D
MODELO:	2015
CLASE:	FAMILIAR
SERVICIO:	PRIVADO
COLOR:	ROJO
NO. MOTOR:	SDH1P50FMH2E5823335
NO. CHASIS:	9FMPCHK28FF008186
ASEGURADO:	N

VEHÍCULOS

INTERVINIENTE:	
TIPO VINCULACION:	ELEMENTO CAUSANTE DEL DELITO
MARCA:	KIA
PLACA:	SHT955
MODELO:	2019
CLASE:	PASAJEROS
SERVICIO:	PUBLICO
COLOR:	AMARILLO
NO. MOTOR:	G4LAJP085992
NO. CHASIS:	KNAB2512AKT374866
ASEGURADO:	N

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente, pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67 - 69 del C.P.P y 435 - 436 C.P.).

FECHA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS :	27/may/2021
HORA:	09:00:00
Para delitos de acción continuada:	
FECHA INICIAL DE COMISIÓN:	27/may/2021
HORA:	09:00:00
Lugar de comisión de los hechos :	
MUNICIPIO:	1 - POPAYÁN
DEPARTAMENTO:	19 - Cauca

DIRECCIÓN:	19001 BARRIO/LOCALIDAD/COMUNA:SANTA HELENA/COMUNA 8,POPAYÁN/CAUCA,SANTA HELENA
USO DE ARMAS:	No
USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS:	No

Relato de los hechos:

¿Qué viene a denunciar?
 LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO

¿Cómo le pasó?
 SE RECIBE EL DÍA DE HOY LUNES 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE ATENCION AL USUARIO OFICIO SIN NUMERO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD MEDIANTE EL CUAL EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO HOYOS GIL , QUIEN PONE EN CONOCIMIENTO DE LA FGN UN ACCIDENTE DE TRANSITO SUCEDIDO EL PASADO 25 DE MAYO A LAS NUEVE DE LA MAÑANA EN LA CALLE 5 CON CARRERA 27 BARRIO SANTA ELENA, DONDE RESULTA UNA PERSONA LESIONADA, AL EXPEDIENTE DIGITAL SE AGREGA DCOUMENTO.-

ABC SUIP:

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | ¿Tiene alguna evidencia que aportar a la denuncia? | NO REPORTADO |
| 2 | Advertencia | NULL |
| 3 | Importante: | NULL |
| 5 | ¿De cuántas de estas víctimas tiene información para aportar? | 1 |
| 6 | ¿En el lugar de los hechos o en su alrededores existen cámaras de seguridad que hubieran podido grabar los hechos? | NO REPORTADO |
| 7 | ¿De cuántas de estas personas tiene información para aportar? | 1 |
| 8 | ¿De cuántos de estos testigos tiene información para aportar? | 0 |

Firma del Denunciante

Firma de quien recibe la Denuncia

JAIRO ALBERTO SANCHEZ CAMPO
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Firma de quien registra



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co - Tels. 3166585726 - 8317599

Popayán, ocho (08) de septiembre de 2023

EXPEDIENTE: 190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE: CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE GRUPO

SENTENCIA JPA 141

ANTECEDENTES

1. DEMANDA¹

Quienes integran la parte demandante² actuando a través de apoderada judicial y en ejercicio del Medio de Control de Acción de Grupo formulan demanda contra el **MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARIA DE TRÁNSITO; LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA; LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL; LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA; ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.**

1.1 PRETENSIONES

Solicita la parte actora como pretensiones:

- Declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas con

¹ Jacqueline Serna Caseres, Cristhian Camilo Lopez Manchola, Carmina Castillo Navarro, Eraldo Pino Ceron, Nehiber Santiago Ordoñez Pino, Maximo Hurtado Velasco, Gabriel Antonio Collazos Bolaños, Palmiro Ignacio Velasco García, Samir Nelson Meneses Lucio.

² Conforme la relación consignada en el Auto I-1253 del 6º de septiembre de 2022 ("009AUTO ADMITE GRUPO.pdf")

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

ocasión de los daños causados al grupo demandante como consecuencia del incendio ocurrido el día 28 de mayo de 2021, al interior de las instalaciones del parqueadero ubicado en la carrera 6ª No. 10N 33 y carrera 6ª No. 10N 77 de la ciudad de Popayán, conflagración originada en el marco de las protestas del denominado “paro nacional”.

- Condenar a las entidades demandadas a reconocer y pagar los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a cada uno de los miembros del grupo demandante, conforme la relación expuesta en el escrito de demanda, sumas que deben ser debidamente indexadas.

1.2. HECHOS:

Como fundamento de las pretensiones se expuso -en síntesis- lo siguiente:

- Que con fecha 28 de mayo de 2021, aproximadamente entre las 17:00 y 20:00 horas, se presentó un incendio al interior de las instalaciones del parqueadero ubicado en la carrera 6ª No. 10N 33 y carrera 6ª No. 10N 77 de la ciudad de Popayán, conflagración originada en el marco de las protestas del denominado “paro nacional”.
- En el referido inmueble se encontraban retenidos algunos automotores y motocicletas cuya propiedad o tenencia recaía sobre el grupo de demandantes; estos vehículos fueron incinerados por quienes hacían parte de las manifestaciones.
- La administración y custodia del parqueadero se encontraba a cargo del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. en virtud del Contrato Interadministrativo No. 20161800013327 del 6 de octubre de 2016, celebrado con el municipio de Popayán; a su vez, el CDA contaba con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual suscrita con Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual tenía una vigencia del 3 de septiembre de 2020 al 3 de septiembre de 2021.
- Cada uno de los miembros del grupo demandante han asumido los costos de transporte desde la fecha de consumación del daño, hasta el momento de radicación de la demanda.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional³

³ “022ApoderadoPonalContesta.pdf”

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

Señaló que gracias a la intervención de la Policía Nacional en el marco de las protestas, pudo evitarse mayor afectación o actuaciones delincuenciales más graves sobre otras edificaciones gubernamentales; agregó que no puede alegarse omisión alguna al deber de cuidado y prevención, en tanto se dispuso el despliegue de más de 1000 miembros de la institución para controlar las alteraciones del orden público.

Adujo que la Policía Nacional no tenía la responsabilidad de custodiar las instalaciones del parqueadero, ubicado en la carrera 6ª No. 10N – 33, por cuanto, la administración y salvaguardia del inmueble se encontraba a cargo del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán.

Enfatizó en que los ataques perpetrados el día 28 de mayo de 2021 contra las personas y bienes civiles fueron indiscriminados e imposibles de resistir por parte de la fuerza pública, en tanto, no resultaba posible prever su ocurrencia.

Propone como excepciones de mérito el *hecho de un tercero*, *falta de legitimación en la causa por pasiva* y *el ataque indiscriminado*.

2.2. Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda.⁴

Informó que, además del incendio provocado en los hechos vandálicos del 28 de mayo de 2021, también fueron robados vehículos y destruidos elementos de seguridad y de oficina, e indicó que el parqueadero contaba con vigilancia privada y acompañamiento de la Policía Nacional, pese a lo cual el personal disponible no fue suficiente ante la actitud irracional y desbordada del ataque; añadió haber dado información a las autoridades sobre la amenaza de ataques que circulaban por las redes sociales.

Refirió que, para el 28 de mayo del año 2021, el Contrato Interadministrativo 20161800013327 del 6 de octubre de 2016 se encontraba finalizado por mutuo acuerdo entre las partes, tal y como consta en el acta suscrita para tal efecto el día 8 de febrero de 2021.

Propuso como excepción de fondo el *hecho de un tercero*, explicando que los daños fueron generados por las personas involucradas en la llamada “protesta social”, siendo contrario a los hechos culpar a las autoridades competentes por falta de diligencia cuando la violencia y el número de personas que participaron en los actos vandálicos hacían incontrolable la situación.

⁴ “008CONTESTACION DDA.pdf”

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

2.3. Fiscalía General de la Nación⁵

Previa relación de los antecedentes de la demanda indicó como causa efectiva de los daños reclamados el tumulto vandálico generado durante las protestas del día 28 de mayo de 2021, lo que configura la excepción denominada *hecho de un tercero*; igualmente, refirió la *inexistencia del hecho causal* entre el daño producido a los demandantes y la actuación de la Fiscalía General de la Nación, puesto que tampoco se comprobó que los eventos se hayan generado por alguna acción u omisión por parte de la entidad.

2.4. Municipio de Popayán⁶

Advirtió la inexistencia de nexo causal que permita deducir la responsabilidad del municipio en los presuntos daños y perjuicios reclamados, enfatizando en que el hecho exclusivo y determinante de aquellos fue el actuar de quienes originaron los desmanes en el parqueadero, generando una situación ajena, imprevisible e irresistible para el municipio de Popayán.

Propuso además del *hecho del tercero*, las excepciones de *caso fortuito o fuerza mayor*, *inexistencia de falla en el servicio*, *inexistencia del nexo de causalidad*, *ausencia de daño cierto, real y determinable*, *compensación* -atendiendo a que los vehículos automotores tienen multa por infracción a las normas de tránsito- y la *falta de legitimación en la causa material por pasiva*.

2.5. Aseguradora Solidaria de Colombia⁷

Confirmó la existencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, enfatizando en que la misma no cubre los hechos que se debaten en el proceso, en razón a que no tuvieron como causa la acción u omisión de las entidades demandadas, sino una situación de fuerza mayor y de terceros.

Se opuso a que el juzgador tome en consideración el material fotográfico aportado con el escrito de la demanda, argumentando su falta de idoneidad probatoria para acreditar las circunstancias fácticas expuestas por el grupo de demandantes.

Expuso que el objeto del seguro pactado consistía en los perjuicios materiales causados a terceros por culpa imputable al asegurado como consecuencia del uso de los parqueaderos,

⁵ "032ApoderadaFiscaliaContestaPolderAdniexosExcepciones.pdf"

⁶ "033ApoderadoMupcioPopayanContestaPoderAnexosLlamamientoGrtia.pdf"

⁷ "036ApoderadoAseguradoraSolidariaContestaPoderExcepcionesAnexosmisorio.pdf"

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

no obstante, los hechos expuestos involucraron una situación excluida del contrato de seguros de daños, al consistir en un riesgo catastrófico de *“guerra civil o internacional, motines, huelgas, movimientos subversivos o, en general, conmociones populares de cualquier clase...”*

Propuso como causal eximente de responsabilidad la *fuerza mayor* -al constituirse un hecho externo e irresistible-; de igual manera señaló excepciones relacionadas con la ausencia de cobertura de la póliza de seguro.

2.6. La Previsora S.A. Compañía de Seguros⁸

Se opuso a la declaración de responsabilidad del municipio de Popayán y la consecuente indemnización por los daños causados al grupo demandante, en razón a que no se probó la falla en el servicio o el error de conducta por parte de la entidad territorial, siendo que la causa del daño involucró un hecho fortuito y exclusivo de un tercero configurado por actos vandálicos imprevisibles.

Advirtió que los cálculos realizados para tasar los daños carecen de solidez lógica, matemática y jurisprudencial, al no haberse allegado prueba alguna que aclare la forma de su cuantificación.

Con respecto a la relación sustancial de las pretensiones del llamamiento en garantía interpuso como excepciones la *inexistencia de siniestro, ausencia de cobertura, falta de cumplimiento de las obligaciones y cargas derivadas del seguro por parte del asegurado, cuantía máxima de indemnización y carencia de solidaridad entre el municipio de Popayán y La Previsora S.A.*

2.7. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República⁹

Reseñando lo previsto en la Constitución Política de Colombia, explicó que el Gobierno, en cada negocio particular, se encuentra constituido por el presidente de la República y el ministro o director de Departamento correspondiente, de manera tal, que los actos del primer mandatario tienen valor y fuerza cuando son suscritos y comunicados por el ministro o director del Departamento Administrativo respectivos -funcionarios que por el mismo hecho se hacen responsables-.

⁸ “056ApoderadoLaPrevisoraContestaDda.pdf”

⁹ “065PresidenciaRepublicaContesta.pdf”

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

Explicó que, el presidente de la república y la Presidencia de la República no son la misma persona, siendo el primero la máxima autoridad administrativa de la rama ejecutiva y la segunda una entidad de entre las varias que existen en el orden nacional, representada judicial y extrajudicialmente por la Secretaría Jurídica; agrega que el Departamento Administrativo de la Presidencia - DAPRE tiene como denominación abreviada "Presidencia de la República", siendo de su competencia dirigir, coordinar y realizar las actividades necesarias que demande el presidente de la república para el ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponden.

Propuso como excepción el *hecho de un tercero*, solicitando su desvinculación en la medida en que no ostenta dentro de sus funciones competencia alguna con los hechos que se discuten dentro del proceso y tampoco ejerce la representación de la Nación para el mismo asunto.

2.8. Ministerio de Defensa¹⁰

Previas consideraciones sobre la naturaleza y obligaciones que le son propias, advirtió que el imperativo constitucional de brindar seguridad a los ciudadanos y controlar los atentados contra el orden público no constituye un deber absoluto del Estado dada la imposibilidad de comprometer su responsabilidad frente a cada uno de los actos que vulneran derechos y libertades de las personas, razón por la cual, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que la actuación de la fuerza pública es de medios, no de resultado.

Puntualizó en que el municipio de Popayán debe probar las actuaciones adelantadas como primer respondiente frente a los acontecimientos del 28 de mayo de 2021 resaltando que la entidad territorial no solicitó la Asistencia Militar establecida en la Ley 1801 de 2016, apoyo que exige el requerimiento previo de la primera autoridad civil, a fin de que el presidente de la república pueda ordenar de forma temporal y excepcional la actuación de la fuerza armada, asistencia que tampoco constituye la primera medida a tomar ante situaciones de protesta social.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN – CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

3.1. Parte demandante

Asegura haberse acreditado la advertencia por diferentes medios de comunicación, autoridades locales, ciudadanos e incluso por el propio administrador del parqueadero del barrio Bolívar sobre los actos vandálicos y violentos del 28 de mayo de 2021; destacó la copia

¹⁰ "077ApoderadaMinDefensaConstesta.pdf"

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

de los oficios remitidos por el representante legal del CDA a la alcaldía y Policía Nacional el 29 de abril de 2021, con el fin de que fueran tomadas las medidas necesarias en caso de riesgo, además de los escritos enviados a la Fiscalía General solicitando la disposición de otro sitio de albergue de los vehículos.

Puso de presente que el certificado de seguridad humana y protección contra incendios del CDA se encontraba en trámite de actualización al momento de la conflagración, destacando el hecho de haberse utilizado agua de la piscina del conjunto residencial aledaño para controlar el fuego.

Refirió que el daño emergente se acreditó a través de la valoración realizada con los precios del mercado, documento que no fue tachado de falsa, ni desconocido por la contraparte; de igual manera, aduce probado el lucro cesante con los documentos que muestran los ingresos dejados de percibir por los propietarios o poseedores que utilizaban los vehículos para su trabajo.

3.2. Nación – Ministerio de Defensa¹¹

Replicó los argumentos expuestos en la contestación y resaltó el vacío probatorio con respecto al nexo causal del Ministerio de Defensa con el daño demandado; agregó que los testimonios e interrogatorios de parte practicados demuestran que la entidad no tuvo actuación o relación alguna con los hechos fundamento del litigio.

3.3. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República¹²

Advierte que no se acreditaron los supuestos fácticos exigidos para atribuir responsabilidad a la entidad, puntualizando en que la demanda se relaciona con hechos competentes del sector de la defensa y no de la Presidencia de la República.

3.4. Policía Nacional¹³

Resaltó la inactividad probatoria del grupo demandante, destacando la ausencia de prueba de la propiedad de los automotores y la certificación o evidencia respecto del daño irrogado;

¹¹ "128DefensaAlegatosConclusion.pdf"

¹² "129DptoPresidenciaAlegatosConclusion.pdf"

¹³ "048ApoderadoPoliciaNacionalAlegatosConclusion.pdf"

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

igualmente, enfatizó en que la Policía Nacional no tenía la custodia o el deber de cuidado de los vehículos, ya porque estos hicieran parte de una investigación penal como elemento material de prueba o porque se encontraban a disposición de la Secretaría de Tránsito a causa de una infracción.

3.5. Centro de Diagnóstico Automotor Ltda.¹⁴

Reiteró la solicitud de desvinculación, ahondando en la argumentación plasmada en la contestación de la demanda respecto a cada uno de los hechos.

3.6. Municipio de Popayán¹⁵

Tras referir los antecedentes de la demanda adujo que las pruebas practicadas no permitieron identificar e individualizar un grupo de al menos 20 personas como titulares o legitimados en la causa por activa; enfatizó en el caso de la señora Carmina Castillo Navarro, quien reclama por un vehículo que declaró haber prestado al señor Rubén Darío Tintinago Amaya a quien, conforme la prueba practicada, le fue devuelto el automotor.

Subrayó el testimonio de quien para entonces era administrador del CDA -señor Hernán Darío Montoya Urrego-, quien declaró que la Policía Nacional hizo presencia el día de los hechos pero se vio desbordada en su capacidad de respuesta como consecuencia de la multitudinaria presencia de personas que cometían actos vandálicos.

Recalcó igualmente la inactividad probatoria de la parte demandante respecto de la tradición del dominio de los vehículos, situación que impide la estructuración de algún tipo de derecho, en tanto que, el daño debe ser cierto y encontrarse plenamente acreditado para ser imputable a alguna entidad.

Finalmente, manifestó que la prueba documental y la practicada en el proceso impidió tener certeza con respecto a la estructuración de la responsabilidad de la entidad territorial, al no haberse demostrado que el nexo causal radicara en una falla en el servicio por parte del municipio de Popayán.

3.7. Fiscalía General de la Nación¹⁶

Enfatizó en las causales de exoneración y excepciones de mérito señaladas en la contestación

¹⁴ “132CDAPopayanAlegatosConclusion.pdf”

¹⁵ “133McpioPyanAlegatosConclusion.pdf”

¹⁶ “134FiscaliaAlegatosConclusion.pdf.pdf”

EXPEDIENTE: 190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE: CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y
OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE GRUPO

de la demanda, indicando que no fue allegada o practicada prueba de la conducta irregular u omisiva por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Adujo que, pese a que el señor Hernán Darío Montoya Urrego declaró sobre la presunta existencia de amenazas, no fue aportada prueba de denuncia o solicitud ante autoridad alguna; del mismo testimonio, resaltó la declaración sobre la forma rápida en que ocurrió el incendio de los automotores y los saqueos.

Respecto de la prueba de interrogatorio de parte indicó que quienes fueron llamados para tal efecto resultaron ser meros poseedores de los vehículos y que, en algunos casos, estos no recordaban fechas, ni situaciones particulares respecto de las cuales fue instaurada la presente acción.

3.8. Aseguradora Solidaria de Colombia¹⁷

Citando textualmente el testimonio de quien se desempeñó como administrador y colaborador del CDA -señor Hernán Darío Montoya Urrego- toma por acreditado el hecho imprevisible por parte de un tercero y la diligencia y cuidado que emplearon las autoridades y entidades para evitar cualquier situación de riesgo.

Recalcó el contenido de la póliza 435-80-994000000367 indicando que en la misma constan como exclusiones de amparo el acto terrorista, motín, conmoción civil, perturbación del orden público, manifestaciones públicas, tumultos o disturbios políticos.

Realizó la afirmación realizada por el representante legal del CDA quien indicó que para el 28 de mayo de 2021 el parqueadero municipal se encontraba a cargo de la administración territorial, en razón a que el Convenio Interadministrativo 20161800013327 fue terminado de forma anticipada y por mutuo consentimiento -hecho expuesto también en la copia de las actas 129 y 130 de la asamblea extraordinaria o junta de socios del CDA-.

En igual sentido, refirió la prueba documental contenida en el Acta de Liquidación del Contrato 20161800013327 suscrita tanto por el alcalde como por el representante legal del Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán y el secretario de Tránsito y Transporte municipal, destacando que dicho contrato fue liquidado por mutuo acuerdo desde el 31 de marzo de 2021 -con estos documentos toma por probada la falta de legitimación por pasiva del CDA-.

Trajo a colación la copia del Informe de Procedimiento de Control de Disturbios realizado el

¹⁷ "135AseguradoraSolidariaAlegatosConclusion.pdf"

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

28 de mayo de 2021 en el sector parqueadero de tránsito municipal del Barrio Bolívar de Popayán, indicando la actuación diligente desplegada por parte de la Policía Nacional a fin de intentar controlar la acometida violenta de la turba.

De otro lado, señaló que la prueba fotográfica allegada al plenario con el escrito de demanda no puede ser valorada para efectos de probar los hechos, puesto que se carece de certeza acerca del lugar en el que fue tomada, además del desconocimiento acerca de la fecha y persona que realizó dicho registro.

Finalmente, citando extractos de jurisprudencia, advirtió que no existen condiciones uniformes para el grupo demandante, poniendo de presente el caso de la señora Carmina Castillo Navarro cuyo testimonio resultó inconsistente e irregular, pues desconocía la placa de su vehículo e ignoraba si el mismo se encontraba dentro del parqueadero municipal ubicado en el barrio Bolívar.

3.9. La Previsora S.A.¹⁸

Aludió al hecho de que los accionantes interrogados en audiencia de pruebas -Palmiro Ignacio Velasco García, Cristian Camilo López Manchola, Gabriel Antonio Collazos y Jaqueline Serna Cáceres- no demostraran tener conocimiento alguno en relación con los acontecimientos que constituyen el fundamento de la acción de grupo siendo que, por lo demás, la parte actora no acreditó que los vehículos de los demandantes fueran incinerados el 28 de mayo de 2021.

Advirtió que el informe técnico emitido por el representante legal de CDA corroboró que para el momento de los hechos la custodia de los vehículos se encontraba a cargo de aquella entidad; añadió que la declaración del señor Hernán Darío Montoya Urrego - administrador del Centro de Diagnóstico para el 28 de mayo de 2021 y testigo presencial de los hechos- permitió probar la existencia de un contrato de colaboración para dicha fecha.

Indicó que no fue aportado documento alguno para acreditar la custodia por parte del municipio de Popayán de los vehículos que se encontraban al interior del parqueadero del CDA, situación dispuesta en virtud del acta de liquidación del contrato interadministrativo celebrado entre el Centro de Diagnóstico y la entidad territorial.

Expresó que las pruebas documentales y testimoniales permiten colegir que el daño no es en modo alguno responsabilidad del municipio de Popayán, entidad que acudió a la fuerza pública y al cuerpo de bomberos a fin de contener los actos violentos de vandalismo, lo que

¹⁸ "135AseguradoraSolidariaAlegatosConclusion.pdf"

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

implica conlleva la falta de sustento para declarar el siniestro conforme al contrato de seguro, póliza que excluye de su cobertura los actos mal intencionados cometidos por terceros.

3.10. Concepto del Ministerio Público¹⁹

Previa relación de los antecedentes de la demanda y el análisis de las pruebas practicadas solicita que -al no haberse acreditado la configuración de los elementos de responsabilidad administrativa de las entidades- sean denegadas las pretensiones del grupo, destacando además la configuración de la causal denominada hecho de un tercero.

CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Este Juzgado es competente para conocer del presente asunto en primera instancia en razón de la materia, lugar donde ocurrieron los hechos (artículo 51, Ley 472 de 1998) y la cuantía (numeral 11 artículo 155, Ley 1437 de 2011)

2. EJERCICIO EN TÉRMINO DE LA ACCIÓN

Los hechos por los que se pretende la indemnización de perjuicios ocurrieron el 28 de mayo de 2021, por lo que el plazo para interponerla sin afectación de caducidad sería hasta el 29 de mayo de 2023; como la misma fue radicada el 11 de agosto de 2022 se concluye que su presentación se realizó dentro del término legal previsto en el artículo 164 del C.P.A.C.A.²⁰

3. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde establecer si las demandadas **MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARIA DE TRÁNSITO; LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA; LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL; LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**

¹⁹ "135ConceptoProcurador.pdf"

²⁰ El artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece en su numeral 2º literal h) que "Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo;".

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

DE LA REPÚBLICA; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA; ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA deben responder por los presuntos daños causados a los demandantes como consecuencia de los hechos ocurridos el día 28 de mayo del año 2021, cuando se desarrollaba una manifestación con ocasión del denominado “paro nacional”.

3. CASO CONCRETO

3.1. Hechos probados

En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, se destaca -a partir de los medios probatorios allegados oportunamente al proceso- lo siguiente²¹:

- Informe de novedad sobre los hechos ocurridos en el parqueadero ubicado en la carrera 6ª 10-33 y carrera 6ª 10N-77 de la ciudad de Popayán:

“ El 28 – 05 – 2021 siendo aproximadamente las 14:20 horas, por orden transmitida vía radio por mi mayor Sandoval Montaña... ordena realizar desplazamiento desde el aeropuerto de la ciudad de Popayán hacia el Comando de Policía Metropolitana. Una vez en el lugar nos ordena realizar desplazamiento en motocicleta hacia la estación del sur ubicada en la calle 5 # 2N – 36 Barrio Bolívar con el fin de apoyar las unidades que se encuentran en intervención en ese sector, toda vez que un grupo de manifestantes se está tomando las instalaciones policiales y agrediendo al personal policial con objetos contundentes, piedras, pilas, varillas, botellas, papas explosivas, bombas molotov entre otros. De inmediato se transmite la orden de personal y se inicial el desplazamiento hacia el lugar ordenado y llegando a las 15:55 aproximadamente... se inicia de forma inmediata procedimiento de intervención de control de disturbios con el fin de proteger las instalaciones policiales y contener la turba de 1800 manifestantes aproximadamente, quienes realizaban actos violentos mediante vías de hecho y comportamiento contrario a la convivencia al igual que se encontraban bloqueando la vía, afectando la libre locomoción de personas y vehículos que a esta hora pretendían transitar por este lugar, obstaculizando la vía con barricadas (palos, llantas, escombros...) donde nos empezaron a agredir con objetos contundentes (piedras, palos, ladrillos, vallas y artefactos explosivos improvisados, papas bomba y bombas incendiarias, bombas molotov)...

Es de anotar que siendo aproximadamente las 18:30 horas me ordenan desplazamiento

²¹ “022ApoderadoPonalContesta.pdf”

EXPEDIENTE: 190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE: CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y
OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE GRUPO

hacia las instalaciones del Éxito del Norte para que apoye al personal que se encuentra realizando intervención control de disturbios en ese lugar, toda vez que manifestantes están intentando saquear dicho almacén; una vez en el lugar se inicia intervención en la glorieta del Éxito logrando después de aproximadamente dos horas dispersar los manifestantes...

De igual manera mediante requerimiento vía radial, siendo las 20:10 horas mediante orden el mayor Wilmer Sandoval me ordena realizar desplazamiento hacia los patios del tránsito municipal con el fin de apoyar las unidades que se encuentran en ese lugar el cual ... había sido objeto de acciones vandálicas, al entrevistar el personal policial que se encontraba de servicio en el lugar me manifiestan que el grupo de personas que vandalizaron e incendiaron el lugar ya fueron dispersadas motivo por el cual procedo a ubicar el personal de forma estratégica en las instalaciones del parqueadero a espera de órdenes".

Siendo las 22:30 por orden de mi mayor Sandoval procedo a trasladarme en vehículo tipo camión frente a las instalaciones del aeropuerto de la ciudad de Popayán".

- Entrevista realizada por la Fiscalía General de la Nación el 29 de mayo de 2021 al señor Hernán Darío Montoya Urrego, de profesión psicólogo y quien ejercía como administrador del parqueadero CDA Barrio Bolívar el día 21 de mayo de 2021:

2 RELATO

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación al conocimiento que tiene de los hechos objeto de investigación (Registrar tal y como lo manifiesta la persona. Utilizar preguntas para precisar aspectos de lo manifestado por el entrevistado):

En mi calidad de administrador del parqueadero CDA Barrio Bolívar. El día de ayer estaba atento a la situación que

Versión: 02

Aprobación: 2018-09-06 CPJ

Publicación: 2018-12-27

Hoja N°. 1 de 2



Fiscalía General de la Nación
Fecha: 2021-05-29 15:53:13
Firmado: RECTOR FABIO TROCHES HUERTADO
Código: 90c2a112cc , Firma electrónica

se pudiera presentar en el lugar, yo llegue al parqueadero a las 08:00 am, el lugar tenía dos vigilantes de empresa privada, dos funcionarios un conductor y un ayudante de grúa y veinte policías que nos llegaron al lugar a brindar apoyo de seguridad, en la mañana organizamos carros para alejarlos de posibles daños que se pudieran causar, a las 10:00 am suspendimos atención al público por las marchas que pasaban por el lugar y cerramos las puertas. A eso de las 2:00 de la tarde se empezó a aglomerar gente y empezaron a lanzar artefactos incendiarios hacia adentro y a tirar piedras, terminando por vandalizar las puertas y el cerramiento de la carrera 6 A, por donde ingreso la turba a eso de las 3:30 de la tarde, la policía se replegó por que no lograron contener a la gente que ingresaba encapuchados y armados con cuchillos y machetes, inicialmente se empezaron a sacar o robar motos y equipos de oficina de computo, finalmente se concentraron en incinerar la totalidad de carros y motos que quedaban al interior del parqueadero y nos tocó salir con ayuda del SMAD que llego a las 4:30 pm, yo me retire y el ataque continuo por una hora más y en la noche que se retiró la fuerza pública, la gente continuo realizando saqueo de motos hasta la mañana del día de hoy. Quiero indicar que el consolidado de las afectaciones realizadas tanto en el sitio como a los carros y motos que se encontraban en el parqueadero lo haremos llegar oportunamente a la fiscalía correspondiente una vez realicemos el consolidado de los daños y hurtos. Esos es todo. La presente entrevista se termina siendo las 13:30 horas.

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

- En declaración rendida durante la audiencia de pruebas²², el señor Darío Urrego -testigo presencial directo de los hechos- señaló que el día 28 de mayo del año 2021 se encontraba al interior del parqueadero del Barrio Bolívar en razón de las funciones de colaboración que cumplía para el CDA relacionadas con la elaboración del inventario para la entrega de los vehículos al municipio de Popayán.

Relató el testigo que, desde la semana previa al día de los hechos, la Policía Nacional se encontraba vigilando el inmueble por solicitud realizada a causa de los rumores en páginas web y redes sociales, en las que se comentaba sobre un eventual ataque contra el mobiliario y vehículos que se encontraban al interior del parqueadero.

Narró que desde semanas atrás se había estado realizado el traslado de motos al parqueadero ubicado en la antigua "perrera municipal", desplazamiento que no obedeció a algún tipo de prevención ante una eventual amenaza, sino para hacer efectiva la entrega a Tránsito Municipal de las motocicletas que no estaban en proyecto de chatarrización.

Reseñó que el 28 de mayo de 2021, se encontraban alrededor de 18 miembros de la Policía Nacional más dos miembros del personal de seguridad privada; no obstante, la violencia de la multitud terminó anulando cualquier tipo de defensa -incluso cuando arribaron las tanquetas y personal del ESMAD-, pues eran lanzadas bombas "molotov" desde la calle e ingresaron por la fuerza una gran cantidad de personas que destruyeron el mobiliario de la administración del parqueadero e incendiaron los vehículos que se encontraban en el interior.

3.2. Responsabilidad de las entidades

En el presente caso y según lo expuesto en la demanda, las entidades accionadas incurrieron en falla del servicio por omisión al deber de protección, en razón a que permitieron o no previeron el incendio y consecuente destrucción de los vehículos que se encontraban al interior del parqueadero del Barrio Bolívar.

De conformidad con lo expuesto por el señor Hernán Darío Montoya -el único testigo presencial de los hechos cuya declaración fue solicitada- la Policía Nacional se encontraba en vigilancia del parqueadero del Barrio Bolívar de la ciudad de Popayán desde una semana antes de la explosión de violencia del 28 de mayo del año 2021, presencia de fuerza pública solicitada por el CDA a raíz de mensajes que aparecieron en redes sociales y páginas de internet; lo que

²² "125AudPruebasAccGrupo-2022-133.pdf"

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

indica que -efectivamente- se contó con asistencia de la fuerza pública previo al día de la conflagración.

Siguiendo los informes de novedad de la Policía Nacional, se tiene que el día 28 de mayo del año 2021 un grupo de alrededor 1800 personas se tomó las instalaciones de la estación ubicada en el Barrio Bolívar, atacando con piedras, arrojando artefactos explosivos, pilas, "papas bomba", bombas molotov etc. y bloqueando las vías aledañas con palos, llantas y escombros; momentos después –siguiendo la referida bitácora- otra nutrida congregación de manifestantes atacaba e intentaba saquear las instalaciones del almacén ÉXITO vía Panamericana; de igual forma, en el parqueadero del CDA se presentaba la aglomeración, ataque e incendio de los automotores que se encontraban en el interior del inmueble.

Se colige sin lugar a dudas que se trató de una manifestación que concentró una cantidad considerable de personas al punto que, para poder controlar los disturbios, se requirió la acción de la Policía durante todo el día y la noche, siendo de público conocimiento que el alcalde de la ciudad de Popayán se vio obligado a decretar el toque de queda, prohibiendo el desplazamiento y circulación de personas y vehículos desde las 6 p.m. del viernes 28 de mayo y hasta las 5 a.m. del 30 de abril de 2012.

Ahora bien, no observa esta agencia judicial que se haya acreditado de forma palmaria la alegada conducta omisiva de las autoridades, pues si bien es cierto la Policía Nacional tuvo que retroceder y cesar en su esfuerzo inicial por detener la multitud, no lo es menos que en el momento le resultaba imposible dispersar a quienes se encontraban armados con piedras y garrotes y utilizaban diversos artefactos explosivos, al punto que ni aún con el doble de los agentes del orden que se encontraban en el parqueadero del Barrio Bolívar hubiese sido posible contener la violencia del grupo de atacantes. Igualmente se debe considerar que al mismo tiempo ocurrían asonadas y situaciones similares en otros puntos de la ciudad.

De otro lado, se aduce que las entidades accionadas incumplieron sus deberes y funciones en tanto, conocían que el país se encontraba en un paro nacional y existía ya una "pre-advertencia" del 19 de mayo de 2021 cuando se generó un incendio de menor magnitud en los mismos patios, no obstante, con el fin de acreditar tal situación únicamente se aportaron copias de informes de una página de internet "*kienyke.com*".

Respecto de la valoración probatoria de las noticias periodísticas, debe tenerse en

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

consideración la postura uniforme que al respecto ha mantenido el Consejo de Estado²³:

“En relación con el conjunto –abundante- de fotocopias de recortes de periódicos aportados con la demanda... la Sala se abstiene de hacer cualquier tipo de consideración y valoración sobre los mismos, como quiera que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción alguna a dichos documentos, en tanto que a partir de ellos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados.”

De esta manera, surge evidente que carece de certeza probatoria lo narrado en este punto por el demandante; no obstante, aún si en gracia de discusión se tomara por cierto que hubo previos conatos de quema de vehículos, vale resaltar la información al respecto entregada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán:

²³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de febrero de 2012, Rad. 21277.

EXPEDIENTE: 190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE: CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y
OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE GRUPO

“... Se realizó visita y registro fotográfico al parqueadero dada la amenaza de atentar contra este sitio, con la intención de determinar nuestro accionar, rutas de acceso, punto de llegada y colocación de nuestros vehículos, sector para la instalación del puesto de comando, mejor visión de toda la edificación y tener presentes los hidrantes cercanos para abastecer nuestros vehículos de control de incendios, llegándose a presentar una situación por algún tipo de manifestaciones, riesgo mayor de edificaciones aledañas ante un incendio declarado, determinando este sitio como las torres de apartamentos localizadas hacia la cra. 7 del punto, lugar que fue crucial en la misma atención cuando se presentó la emergencia en sí, ya

Calle 4N #10A-80 B/Modelo Popayán Tels: 8231313 – 8233923 Cel: 321 771 02 89
E-mail: info@bomberospopayan.org Página Web: www.bomberospopayan.org



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán
Cauca
NIT. 891.500.227-3



que nos sirvió como abastecimiento la piscina de este conjunto de apartamento y sitio seguro de control. En coordinación con la oficina asesora de gestión del riesgo municipal y la oficina de tránsito municipal, se organizó un ataque inicial con una motobomba forte Diesel de 3 pulgadas, facilitada por la Cruz Roja y algunos otros elementos facilitados por nosotros, abasteciendo o alimentado con dos tanques de 2.000 litros, con la intención de tener respuesta y especialmente una línea de ataque para controlar incendios en sus etapas iniciales, con el personal que laboraba en este sitio.
”

En estos términos, la presunta actitud “pasiva” endilgada a las autoridades o entidades encargadas de la custodia del inmueble, no pasa de ser un juicio de valor elaborado con posterioridad a los hechos, sustentado en la consideración de lo que se “debió hacer” ante información que circulaba en redes sociales; sin embargo, en opinión de este juzgador, la magnitud del ataque, la escala de violencia, el contundente saqueo y la violencia desbordada que se presentó el día 28 de mayo del año 2021 no resultaba algo que en modo alguno hubiera podido preverse.

Refiere al respecto el Código Civil en el artículo 64, que la fuerza mayor o caso fortuito se corresponde con un “*imprevisto que no es posible resistir*”, acontecimiento que ha sido

EXPEDIENTE:	190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE:	CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS:	MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE GRUPO

caracterizado en los siguientes términos por la Corte Suprema de Justicia²⁴:

“Sobre este último aspecto, conviene acotar -y de paso reiterar- que un hecho sólo puede ser calificado como fuerza mayor o caso fortuito, es lo ordinario, si tiene su origen en una actividad exógena a la que despliega el agente a quien se imputa un daño, por lo que no puede considerarse como tal, en forma apodíctica, el acontecimiento que tiene su manantial en la conducta que aquel ejecuta o de la que es responsable. Por eso, entonces, si una persona desarrolla en forma empresarial y profesional una actividad calificable como “peligrosa”, de la cual, además, deriva provecho económico, por ejemplo, la sistemática conducción de automotores de servicio público no puede, por regla general y salvo casos muy particulares, invocar las fallas mecánicas, por súbitas que en efecto sean, como constitutivas de fuerza mayor, en orden a edificar una causa extraña y, por esa vía, excusar su responsabilidad”.

De conformidad con lo anterior, resulta evidente que los hechos que se presentaron en el parqueadero ubicado en el Barrio Bolívar de la ciudad de Popayán resultaron imprevisibles en su magnitud y nivel de violencia, a la vez que irresistibles para la Policía Nacional, pues aunque mantuvo presencia antes del 28 de mayo de 2021 y acudió al sitio para controlar la turba, le fue imposible disuadir a la multitud con el personal de la institución que había en ese momento, siendo que otros ataques se presentaban de forma simultánea en distintos lugares de la zona urbana de Popayán.

Es claro para el suscrito juez que en el marco del denominado paro nacional, las autoridades territoriales anticiparon aquellas situaciones que normalmente ocurren en las manifestaciones de este tipo, pero lo que no era factible prever era el saqueo de almacenes e instituciones del estado y la quema de automotores, siendo que –en este último caso- no existía una relación directa de la protesta con algún tipo de medida que involucrara a la Secretaría de Tránsito Municipal o problemas de multas o disposiciones referidas a los parqueaderos o tarifas cobradas para el depósito de aquellos automotores en el sitio.

Ha señalado al respecto el Consejo de Estado²⁵:

“24. El deudor tiene la obligación de prever “lo que es suficientemente probable, no simplemente posible”, por lo que un hecho se considera imprevisible si no existe manera de contemplar o anticipar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente

²⁴ Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 7 de diciembre de 2016, SC17723-2016, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

²⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de septiembre de 2003, Exp. 14.781, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

EXPEDIENTE: 190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE: CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y
OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE GRUPO

porque se presenta de súbito o en forma intempestiva. La calificación de un hecho como fuerza mayor debe efectuarse de cara a cada caso concreto, esto es, ponderando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el suceso. Según la jurisprudencia, para tal efecto deben considerarse los siguientes criterios: (i) el referente a su normalidad y frecuencia, (ii) el atinente a la probabilidad de su realización y (iii) el concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo”.

Lejos también la posibilidad de que la turba de manifestantes hubiere podido ser resistida por las autoridades, pues la cantidad de personas que participaron en estos actos y el desborde de violencia resultaban más propias de una asonada que de una manifestación pacífica, sin dejar de lado que no resultaba viable concentrar la fuerza pública en un solo sitio ante la simultaneidad de desórdenes desproporcionados en otras partes de la ciudad.

Ha explicado el Consejo de Estado:

“Por otra parte, el elemento de la irresistibilidad alude tanto al evento mismo como a sus consecuencias. La inevitabilidad del hecho debe ser absoluta, por lo que no es suficiente la imposibilidad relativa del deudor. Así, la mayor onerosidad sobrevenida para el cumplimiento de la prestación no constituye una imposibilidad absoluta, lo cual marca una diferencia importante entre la fuerza mayor y las hipótesis a las que se les aplica la teoría de la imprevisión. En definitiva, un hecho puede ser calificado como irresistible si es absolutamente imposible evitar sus consecuencias, es decir, si cualquier persona situada en las circunstancias que enfrenta el deudor invariablemente se vería sometido a esos efectos, pues la incidencia de estos no está determinada por las condiciones especiales de quien lo afronta, sino por la naturaleza misma del hecho”.

(Subraya el Despacho)

Por las razones que se acaban de exponer, se concluye que los hechos ocurridos el día 21 de mayo del año 2021 en el parqueadero de la Secretaría de Tránsito Municipal de Popayán ubicado en el barrio Bolívar, carreras 6ª 10N-33 y 6ª 10N-77, no podían ser previstos y tampoco resistidos por las autoridades, configurándose de esta manera el hecho de un tercero.

5. CONDENA EN COSTAS

Si bien el artículo 188 del CPACA señala que en la sentencia el juez “dispondrá” sobre la condena en costas, dicha imposición no deviene en automática, conforme interpretación realizada por el Consejo de Estado en providencia de 30 de mayo de 2019²⁰, en la que señaló que corresponde al operador judicial determinar si, en cada caso particular, resulta o no

EXPEDIENTE: 190013333001 2022 00133 00
DEMANDANTE: CARMINA CASTILLO NAVARRO Y OTROS
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE POPAYÁN; CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DE POPAYÁN; NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y
OTROS
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE GRUPO

procedente la referida decisión, conforme se acredite probatoriamente su causación y se sopesa el proceder de las partes.

No observándose que la parte demandante haya promovido la acción de grupo con temeridad o mala fe, no se condenará en costas en esta instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo antes expuesto.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme la presente providencia, procédase por Secretaría al archivo del expediente y devolver, si a ello hay lugar, los excedentes de gastos del proceso, dejando expresa constancia.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

ERNESTO ANDRADE SOLARTE

Juez

Firmado Por:

Ernesto Andrade Solarte

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

001

Popayan - Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad58139d6073d7a99352187aef0ed4260b66a7db52d0ab4cfc358b84e178108**

Documento generado en 08/09/2023 02:22:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>